

Distr.
RESTRINGIDA
LC/R.1190
29 de octubre de 1992
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

CEPAL
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

**EN BUSCA DE LA EQUIDAD: LAS MUJERES COMO ACTORES SOCIALES
EN EL DESARROLLO DEL CARIBE**

Este documento fue preparado por Joycelin Massiah, consultora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Las opiniones contenidas en él son de la exclusiva responsabilidad de su autora y pueden no coincidir con las de la Organización.

92-10-1485

INDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCION	1
I. EQUIDAD SOCIAL, ACTORES SOCIALES, MUJER Y DESARROLLO	5
II. LA MUJER DEL CARIBE EN LOS AÑOS OCHENTA: UN RESUMEN	13
1. La situación jurídica	14
2. El deterioro de las condiciones económicas	17
3. El marco institucional	24
4. Lecciones que se han aprendido gracias a la experiencia de los años ochenta	25
III. ESTRUCTURAS DE PRODUCCION Y EMPLEO DE LA MUJER	29
1. Agricultura	29
2. Industria manufacturera	33
3. Servicios	36
4. Transformación productiva	37
IV. MIRANDO HACIA EL FUTURO	41
1. Estrategias de desarrollo orientadas hacia afuera	42
2. Desarrollo de los recursos humanos	43
3. Preservación e intensificación de los procesos democráticos	44
4. Cooperación regional	45
CONCLUSIONES	46
Notas ..	46
BIBLIOGRAFIA	47
CUADROS	51

"El verdadero desarrollo tiene que centrarse en la gente"

Comisión del Sur, p. 21

INTRODUCCION

Cuando los países del Caribe miembros del Commonwealth se aproximan al momento en que ingresarán al siglo XXI, tienen por delante numerosos desafíos sociales, políticos y económicos. La preocupación por la continua recesión internacional, el aumento de la pobreza, la escalada de la violencia y la degradación del medio ambiente son sólo algunos de los elementos que alimentan el actual debate sobre el desarrollo. Sin embargo, a pesar de esa lista deprimente, hay signos alentadores de que hay una buena disposición para revisar los enfoques del desarrollo. Una de las principales lecciones que nos dejaron los años setenta fue que los países con los niveles más elevados de crecimiento económico eran los que mostraban los indicadores sociales más favorables. La crisis económica de los años ochenta ha reforzado esa lección; es más, publicaciones recientes de los principales organismos internacionales han ilustrado este asunto. Comenzando con el Informe del Banco Mundial de 1980 y pasando por Ajuste con rostro humano, del UNICEF, Engendering Adjustment for the 1990s, de la Secretaría del Commonwealth y los Informes sobre Desarrollo Humano de 1990 y 1991 del PNUD, está claro que se está comenzando a reconocer que la preocupación por la gente constituye un objetivo que tiene prioridad sobre la necesidad de aumentar la tasa de crecimiento económico. La medida en que el pensamiento teórico sobre el desarrollo está evolucionando en esa dirección probablemente se ilustra más plenamente en el informe de la Comisión del Sur que trató de redefinir un concepto de desarrollo para los pueblos del Sur [Comisión del Sur, 1990].

Dentro del contexto de un desarrollo "centrado en la gente", la mujer y sus problemas adquieren importancia fundamental no sólo debido a su mayoría numérica o su participación en el proceso de desarrollo sino también porque la sociedad atribuye a la mujer papeles que son críticos para el mantenimiento de la sociedad mientras al mismo tiempo subestima su contribución y mantiene una ideología de géneros sesgada hacia los hombres. En ninguna parte se aprecia esto más claramente que en la participación de la mujer en el proceso productivo. Aunque en teoría tiene acceso a todos los recursos productivos disponibles, en la práctica con frecuencia ello no ocurre. Pese a algunos indicios de cambios, las mujeres del Caribe por lo general se desempeñan en los trabajos con más baja remuneración. Su acceso a los empleos mejor remunerados es limitado por su precario nivel de instrucción y escasos conocimientos técnicos y a menudo es bloqueado por elementos sutiles de discriminación. En fin de cuentas, los programas de ajuste de los años ochenta han dado por resultado un empeoramiento de la condición económica y social de la mujer en la subregión y un deterioro concomitante de su capacidad para llevar a cabo las múltiples responsabilidades que la sociedad exige de ellas.

Dentro del contexto de su preocupación por las cuestiones de equidad, el informe de la CEPAL titulado Transformación Productiva con Equidad no aborda ni las cuestiones de género ni las cuestiones relacionadas con la mujer. De este modo, el informe no sólo no reconoce un ejemplo crítico de falta de equidad, sino que tampoco aprovecha la oportunidad para demostrar cómo puede alcanzarse la transformación productiva que prevé si se incorporan en el modelo las cuestiones relacionadas con la mujer. El informe propuesto se centra en la creencia de que los actuales obstáculos económicos pueden ser superados si estamos dispuestos a aprender de la lecciones del decenio pasado y construir sobre la base de los activos acumulados durante un tiempo mucho más prolongado. Entre los elementos principales del modelo se incluyen los siguientes:

- i) incorporación sistemática de los conocimientos técnicos;
- ii) enfoque integrado de la competitividad;
- iii) renovación de las divisiones sectoriales;
- iv) conservación del medio ambiente;
- v) mantenimiento de la equidad, mediante medidas redistributivas;
- vi) combinación de la gestión macroeconómica con las políticas sectoriales;
- vii) integración regional y cooperación intrarregional;
- viii) mantenimiento de las tradiciones y prácticas democráticas;
- ix) reforma del estilo de la intervención estatal.

Las estrategias para garantizar que se alcancen estos objetivos abarcan muchos campos y todo el conjunto de medidas se ha diseñado para aumentar la capacidad de la región para competir en la economía internacional.

Teniendo presente estos antecedentes, este estudio trata de:

- i) reseñar la situación económica y social de la mujer en el Caribe durante los años ochenta; y
- ii) ofrecer propuestas para la integración de la mujer en el desarrollo en el decenio de 1990 y más adelante, teniendo en cuenta el estudio de la CEPAL titulado Transformación Productiva con Equidad.

El estudio adopta la forma de un examen de una vasta gama de material publicado y no publicado sobre la región proveniente de fuentes oficiales y secundarias. No se realizó una recopilación de datos primarios.

Por consiguiente, el estudio se ofrece como un punto de partida que requiere una mayor exploración en una etapa posterior.

El estudio toma como su punto de partida el tema y las recomendaciones del estudio de la CEPAL (en adelante llamado el modelo de la CEPAL) que se describieron brevemente en esta sección. La sección I está dedicada a una comparación del modelo de la CEPAL e iniciativas recientes de los países del Caribe miembros del Commonwealth, en particular las que tienen que ver con la formulación de una nueva estrategia para llegar a un consenso sobre políticas y medidas para introducir a la región en el siglo XXI. Especial atención se presta a los conceptos de "equidad social" y "actores sociales", así como a las posibilidades de incluir a la mujer y las cuestiones relacionadas con ella dentro de los marcos proporcionados por estos dos conceptos. En la sección II se coloca la situación de la mujer del Caribe durante los años ochenta en el contexto de las reformas jurídicas que afectan a la situación de la mujer, el deterioro de las condiciones económicas del decenio y los mecanismos constitucionales existentes para ayudar a la mujer. En la sección III se proporciona información más detallada sobre las tendencias del empleo durante los años ochenta, vinculándolas con algunas de las propuestas de la CEPAL sobre transformación productiva. En la sección IV se trata de presentar propuestas para mejorar la medida en que se pueda incluir a la mujer en un proceso de desarrollo preocupado por la equidad social.

I. EQUIDAD SOCIAL, ACTORES SOCIALES, MUJER Y DESARROLLO

"Es preciso reconocer que las políticas de desarrollo encaminadas a asegurar la equidad y la plena participación en la sociedad deben dar prioridad al mejoramiento de la condición económica y social de la mujer"

Comisión del Sur, p. 139

Si bien puede haber poca discusión en cuanto al aspecto principal del modelo de la CEPAL, una dificultad importante se relaciona con la ausencia de una definición de "equidad social". En una nota de pie de página, se define la equidad como

"la relación entre el ingreso del 40% de la población de ingresos más bajos y el 10% de la de ingresos más altos, adoptándose el valor 0.4 como línea divisoria" [CEPAL, 1990c, p. 63].

Sobre esta base, se dice que ningún país de la región ha alcanzado el objetivo de desarrollo a largo plazo de la transformación productiva con equidad social. Algunos han alcanzado tendencias favorables de crecimiento económico, pero con niveles insuficientes de equidad, otros lograron resultados pocos satisfactorios en ambos indicadores mientras que un tercer grupo alcanzó un grado aceptable de equidad pero con poco o ningún crecimiento económico. Las dificultades económicas del decenio de 1980 sirvieron para reducir pronunciadamente tanto el crecimiento económico como la equidad social que existía hasta tal punto que ningún país de la región fue capaz de combinar el crecimiento con la equidad social. Ello sugiere que la equidad social se interpreta sobre la base del ingreso individual únicamente.

En otro punto del estudio, se examinan los agentes/grupos sociales que se espera apoyen el modelo propuesto

"especialmente en términos de una motivación favorable de éstos para aceptar los sacrificios y las responsabilidades que la transformación productiva trae aparejados" [CEPAL, 1990c, p. 57].

Entre los grupos identificados se incluyen las elites económicas, los estratos medios, los obreros urbanos, los pobres urbanos, los campesinos y los trabajadores rurales. Al parecer la equidad social consiste en que entre los grupos se comparten equitativamente los sacrificios y beneficios del proceso de cambio en el corto y el mediano plazos. En otras palabras, la equidad social se percibe como una cuestión de grupos. La dificultad estriba en que cada uno de estos grupos está compuesto por hombres y mujeres que funcionan en una relación que plantea cuestiones fundamentales acerca del concepto de equidad social. Cualquier propuesta que implique el acceso equitativo a los recursos materiales para producción y distribución y el uso de ellos debe necesariamente examinar en qué forma esa actividad afectará a la

falta de equidad imperante en las relaciones entre hombres y mujeres. De este modo, la equidad social que se pide en el modelo de la CEPAL debe relacionarse con la equidad entre los grupos así como dentro de ellos.

En la subregión del Caribe, como en la región más amplia de América Latina, los gobiernos han afirmado sistemáticamente que están tratando de mejorar la calidad de la vida para todos. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo 1988-1993 de Barbados eligió como su tema "Participación para todos"; el Plan de Desarrollo 1986-1988 de San Vicente y las Granadinas eligió como su tema "Crecimiento, diversificación y redistribución", lo que constituye en efecto un compendio reciente de las demandas de desarrollo del Caribe.

"Tal vez no sea una exageración demasiado grande señalar que el objetivo dominante de las estrategias y políticas económicas del Caribe ha sido el crecimiento económico equitativo, es decir, la búsqueda simultánea del desarrollo y el crecimiento económicos y una estructura igualitaria del ingreso y la riqueza" [Bourne, 1988, p. 15].

Sin embargo, está claro que los gobiernos de la subregión no han logrado alcanzar esos objetivos de desarrollo y en realidad han generado un descontento considerable como resultado de su incapacidad para hacerlo. Asimismo, está claro que la experiencia de los años ochenta ha forzado ciertamente una disminución de las ganancias que se habían alcanzado en los decenios de 1960 y 1970. Reconociendo esta deficiencia, los Jefes de Gobiernos de la CARICOM adoptaron dos decisiones de vasto alcance en su reunión de julio de 1989. La Declaración de Grande Anse anunció la celebración de una Conferencia Económica Regional

"para alcanzar un consenso en la región sobre las políticas y medidas que deberían adoptar los países de la región para asegurar una tasa satisfactoria de desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida al entrar en el siglo XXI".

La segunda decisión se relaciona con el establecimiento de una Comisión de las Indias Occidentales encargada de formular propuestas para promover el movimiento de integración regional. Básica en esa tarea era la participación de la Comisión en la celebración de consultas públicas de vasto alcance. QUE TODAS LAS IDEAS COMPITAN se ha convertido en el lema de la Comisión.

La característica singular de estas dos propuestas es no sólo el momento oportuno en que se hacen y el hecho de que emanen de los jefes de todos los gobiernos de la región, sino el hincapié que hacen en la participación de todos en las deliberaciones. Se trata de la primera ocasión en la historia de la región en que se invita a los pueblos de ella a unirse a sus gobiernos en el trazado de su futuro. En la Conferencia Económica Regional (CER) celebrada en febrero de 1991, se introdujo el concepto de "actores sociales" como vehículo para

"iniciar un diálogo encaminado a lograr un consenso sobre las políticas, estrategias y medidas que la región debería adoptar para tomar un sendero de crecimiento más elevado y sustentable y para mejorar la calidad de vida de todos los pueblos de la región" [CARICOM, 1991, p. 1].

Se consideró que los actores sociales eran: el sector público, las organizaciones del sector privado, el movimiento laboral, las universidades, las organizaciones financieras regionales y las organizaciones no gubernamentales. Se hizo hincapié reiteradamente en que era imprescindible lograr un enfoque cooperativo entre los actores sociales. En ese contexto, la CER formuló las siguientes recomendaciones:

- i) Los actores sociales deberán tomar medidas para mantenerse informados sobre los resultados de esta reunión;
- ii) Los gobiernos que no hayan establecido todavía un mecanismo consultivo en que participen los actores sociales deberán hacerlo a fin de establecer las posiciones nacionales respecto de las diversas cuestiones y efectuar un seguimiento de la puesta en práctica de las decisiones tomadas a nivel regional;
- iii) La Conferencia deberá institucionalizarse como Conferencia Trienal de los actores sociales del Caribe. El Estado miembro en cuyo territorio se celebre la Conferencia tendrá la responsabilidad de presidir la comisión preparatoria;
- iv) El Secretario General de la CARICOM deberá establecer grupos de trabajo de los actores sociales sobre cuestiones seleccionadas, los que celebrarán consultas entre las conferencias trienales.

Pese a que se formularon algunas críticas, todos los actores sociales consideraron que la conferencia constituía un esfuerzo "singular e histórico" que se hacía por fin para comenzar el proceso de alcanzar un consenso y avanzar juntos hacia una vida mejor para todos los pueblos de la región.¹

Las organizaciones no gubernamentales que asistieron a la conferencia estaban descontentas con el proceso de celebración de consultas como se dejó ver en los preparativos de la conferencia, en la representación mínima de las preocupaciones de las organizaciones no gubernamentales en el documento de antecedentes y en la falta de "interés real en celebrar consultas y llegar a un consenso en la formulación de políticas y no se identifican mecanismos para canalizar la labor de los actores sociales" (Stuart, T. y D. Pantin, 1991, p. 6 y 7).

La concertación estratégica constituye la piedra angular en que se apoya el modelo de la CEPAL y el punto alrededor del cual se unen los dos modelos. Para la CEPAL, la concertación estratégica consiste en:

"un conjunto de acuerdos de largo plazo, tanto explícitos como implícitos, entre el Estado y los principales actores políticos y sociales, respecto de los objetivos instrumentales y de la secuencias de políticas e innovaciones institucionales necesarias para alcanzarlos" [CEPAL, 1990c, p. 101].

Es esta herramienta institucional la que otorga legitimidad al modelo de la CEPAL y la que el modelo de la CER considera imprescindible si se desea que la subregión planifique y trabaje con miras a la supervivencia y el desarrollo sustentable. Según el documento de trabajo de la CER

"la concertación, mediante un mayor suministro de información y más oportunidades para celebrar consultas y debates, y la transparencia en la adopción pública de decisiones se convierten en aspectos críticos del enfoque de los actores sociales. Los mecanismos y principios para compartir el poder y la influencia son igualmente críticos" [CARICOM, 1990, p. 13].

Pero aunque ambos modelos consideran la "equidad social", en un caso, y el "crecimiento con equidad" en el otro como el objetivo último del proceso de concertación, ningún modelo introduce un examen de lo que se entiende por equidad. Se puede sostener que la preocupación fundamental es por la justicia social. Por esta razón, el documento de trabajo de la CER prevé estrategias interesadas en

proteger a los grupos sociales vulnerables, distribuir los costos del ajuste económico en forma más pareja entre los distintos grupos sociales, asignar equitativamente las ganancias provenientes de la recuperación y el crecimiento económicos y aumentar la proporción de la población que participa en el proceso de crecimiento económico. Se identifican programas especiales para alcanzar estos objetivos, pero se aprecia todavía la necesidad de consenso para determinar el grado de equidad y justicia social, la identificación de los grupos vulnerables y los principios de redistribución [CARICOM, 1990, p. 11].

En el Caribe, pocos indicadores sociales son publicados por las autoridades estadísticas y los que se publican tienden a no estar agregados, o si lo están, no de tal manera que se informe sobre la cuestión de la equidad social. La información sobre el ingreso está sólo marginalmente más disponible. Utilizando medidas corrientes de distribución del ingreso, el informe Bourne antes mencionado ha concluido que

"se han alcanzado algunos progresos con respecto a objetivos igualitarios ya que los pocos indicios de que se dispone apuntan a grados internacionalmente moderados de desigualdad del ingreso de la mano de obra a nivel de toda la economía, así como sobre una base sectorial en aquellos países no afectados por una grave recesión económica" [Bourne, 1988, p. 17].

Pero los datos que apuntan hacia esta conclusión no están desagregados, se refieren únicamente a tres territorios y se relacionan sólo con los empleados. Por consiguiente, su capacidad para reflejar adecuadamente la incidencia de la desigualdad es limitada. Además, no se tienen en cuenta los factores sociales ni hay un "nivel ideal" explícito adoptado como el objetivo global, como se hace en el modelo de la CEPAL.

Al definir la equidad únicamente desde el punto de vista de la desigualdad del ingreso sólo se abordan las cuestiones de la distribución nominal del ingreso de los empleados, en algunos casos los trabajadores empleados que presentan declaraciones del impuesto sobre la renta, y la distribución de activos. Sin una exposición adecuada de los antecedentes históricos de la situación actual, los cambios introducidos en la estructura de la economía en el transcurso del tiempo y en la prestación de servicios sociales por parte del Estado, las medidas derivadas tienden a ser de poca utilidad. Para tener en cuenta esos factores, una perspectiva de la "calidad de la vida" basada en el uso de indicadores sociales tal vez sea más útil, o puede ser un complemento útil de los datos sobre ingresos, proporcionando un mejor indicador de la "equidad social". Pero en cualquier caso la disponibilidad del tipo de datos en el formato apropiado y con niveles suficientes de cobertura constituye a menudo un impedimento importante para la adopción de medidas.

En la raíz del problema se encuentra un enfoque del desarrollo que ha tendido a separar la política económica de la política social, colocando a la segunda en una posición de subordinación. El tipo de políticas económicas que se ha tratado de aplicar ha tendido a fomentar la concentración de la riqueza y los ingresos, mientras que las políticas sociales han tendido a ser utilizadas para compensar las desigualdades resultantes. Las tendencias económicas recientes sugieren que se están produciendo alteraciones profundas y generalizadas en la estructura de oportunidades de las sociedades que no sólo están afectando las probabilidades de vida de los individuos dentro de los grupos, sino que están alterando también el equilibrio de poder entre los grupos. Un estudio reciente del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) demuestra que la crisis ha producido profundos reajustes dentro de las elites económicas, la clase media, el campesinado y los pobres rurales en África y América Latina. Las personas dentro de estos grupos están reaccionando, en forma individual y colectiva, para proteger su nivel de vida [Ghai y Hewitt de Alcántara, 1989].

Lo que la crisis ha subrayado es que una preocupación por la equidad social debe reflejar una preocupación por las desigualdades en varias dimensiones además del ingreso. Las numerosas publicaciones sobre el impacto social del ajuste estructural ilustran claramente que son las mujeres las que han soportado la mayor parte de la carga [Arriagada, 1991; Antrobus, 1988; Bonilla, 1990; Secretaría del Commonwealth, 1989; Cornia y otros, 1987; de Barbieri y de Oliveira, 1991; Elson, 1987 y 1991; y Massiah, 1990b]. Ellas han creado un arsenal de estrategias encaminadas a reunir recursos para mantenerse a sí mismas y a sus hogares. A menudo ello se ha hecho en detrimento de su propio bienestar. Y siempre se ha hecho en el contexto de una política y un análisis macroeconómicos que tienen incorporado un sesgo conceptual contra la mujer; estrategias de planificación del desarrollo que tienen incorporado un sesgo metodológico contra la mujer; y estructuras del hogar que tienen incorporado un sesgo ideológico contra la mujer.

Esta cuestión fundamental del sesgo del género y de la desigualdad de los géneros invade todas las demás dimensiones de desigualdad —ya se trate de ingresos, consideraciones étnicas, lugar de residencia o edad— y está incluida en la cuestión general de la equidad social por la que se preocupan los modelos de la CEPAL y de la CER. Sin embargo, ningún modelo ha enfrentado la cuestión del género. La única referencia que se hace a la mujer en el modelo de la CEPAL menciona las crecientes tasas de participación de las madres en la fuerza de trabajo como un posible factor de debilitamiento de "algunas de las funciones familiares de socialización y de cuidado y protección de los niños" [CEPAL, 1990c, p. 36]. La única referencia en el documento de consenso de la CER simplemente incluye a las mujeres en los grupos vulnerables que actualmente experimentan dificultades especiales [CARICOM, 1991, p. 2]. Ninguno de los dos modelos reconoció el trabajo del Decenio de las Naciones Unidas que identificó la falta de acceso por parte de la mujer a los recursos como uno de los principales factores que contribuyen a que no se logre la igualdad entre los hombres y las mujeres y a la incapacidad de las estrategias imperantes de desarrollo para asegurar esa igualdad.

Basándose en la obra pionera de Buvinic (1983, 1986), en dos estudios recientes se han tratado de aclarar las principales corrientes de pensamiento que influyeron en el diseño de políticas y programas para la mujer durante los años setenta y los años ochenta. Tinker ve una tendencia creciente hacia la convergencia de las diferentes perspectivas de los propulsores, los ejecutores y los estudiosos y una toma de conciencia cada vez mayor de que la política, más bien que la economía, constituye el camino hacia una "mayor equidad" [Tinker, 1990]. Moser propone una estrategia para la planificación por género basada en una distinción entre las necesidades prácticas y estratégicas de los géneros y una crítica de los diferentes enfoques de política de la mujer y el desarrollo [Moser, 1989]. Con algunas pequeñas variaciones, estos estudios concuerdan con la existencia de cinco cuestiones generales en torno a las cuales se funden las iniciativas de políticas: bienestar, equidad, antipobreza, eficiencia y adquisición de poder (esquemas 1 y 2). Para Moser, estos tipos "ideales" reflejaban cambios en los enfoques de políticas macroeconómicas y macrosociales. No operaban en forma independiente ni lineal, pero cada uno de ellos era claramente identificable en cuanto a los supuestos básicos, metodología y objetivos.

El enfoque del "bienestar" se preocupa del papel reproductivo de la mujer y se centra en programas de socorro (por lo general ayuda alimentaria), nutrición y planificación de la familia. En los casos en que los programas se expandieron para proporcionar capacitación en actividades que producen ingresos, la atención se ha concentrado en campos que supuestamente son familiares a la mujer. Debido a que este enfoque es relativamente barato, fácil de administrar y no amenazante, ya que no pone en tela de juicio la tradicional división sexual del trabajo, continúa siendo practicado. Sin embargo, las severas críticas y los fracasos bien documentados de los programas alentaron la aparición de otros enfoques.

El enfoque de la "equidad", que al parecer es el que está más estrechamente relacionado con el presente examen, es el que Moser considera que ha proporcionado el impulso al Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Reconoce que las mujeres son participantes activas en el proceso de desarrollo; reconoce el efecto frecuentemente negativo de las estrategias de desarrollo económico sobre la mujer; y propone una mayor participación en el empleo en el lugar del mercado como el factor fundamental necesario para proporcionar una mayor independencia económica a la mujer y, por ese conducto, una mayor igualdad con el hombre. El aumento del empleo significó una respuesta a la necesidad práctica de la mujer de obtener ingresos. La concentración de la atención en la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres se consideró como una respuesta a la necesidad estratégica de la mujer de reducir la desigualdad de género. Moser apunta hacia la distinción conceptual entre "equidad", en el sentido de "justicia" o "imparcialidad", e "igualdad", en el sentido de "la condición de ser igual", distinción que, según sostiene, las publicaciones sobre el tema han tendido a hacer confusa. Para ella, el enfoque de la equidad abarca las cuestiones fundamentales de igualdad que trascienden el campo del desarrollo.

Moser sostiene que el enfoque de la equidad ha sido efectivamente dejado de lado por la mayoría de los organismos de desarrollo. Metodológicamente, no había ninguna medida corriente que se pudiera utilizar para estimar el éxito. Políticamente, los objetivos de redistribución del enfoque eran inaceptables tanto para los gobiernos como para los organismos de desarrollo. En la práctica, la estrategia de intervención de arriba hacia abajo reflejaba la estrategia de desarrollo por modernización de los años sesenta y los años setenta que no había logrado éxito en cuanto a su capacidad para redistribuir el ingreso o resolver los problemas de pobreza y desempleo.

Según Moser, el enfoque de la equidad cedió su lugar al enfoque "antipobreza" en que la atención se centró en el papel productivo de la mujer pobre. El hincapié ya no se hizo en reducir las desigualdades entre los hombres y las mujeres, sino en reducir la desigualdad del ingreso. Al proporcionar un mejor acceso a los recursos productivos, este enfoque tiene por finalidad aumentar las opciones de empleo y generación de ingresos y la productividad de las mujeres de bajos ingresos. Sin embargo, al concentrarse únicamente en el papel productivo de la mujer, este enfoque ha tendido a pasar por alto su papel reproductivo y a menudo ha dado por resultado el aumento de la carga de trabajo de esas mujeres. Además, al no abordar la cuestión de la autonomía femenina, no se satisface el objetivo más amplio de la equidad.

En los años ochenta se observó un desplazamiento hacia el enfoque de la "eficiencia", en que la preocupación por las dificultades de la crisis económica y el ajuste estructural desplazó el énfasis desde la mujer hacia el desarrollo. Se ha partido del supuesto de que al aumentar la participación económica de la mujer automáticamente mejorará la situación de ésta y se avanzará en la equidad de género. Sin embargo, la experiencia del ajuste estructural sugiere que cualquier incremento en la participación económica de la mujer probablemente tenga lugar en el sector informal, no protegido y de bajos ingresos. Simultáneamente, las desinversiones en mantenimiento de los recursos humanos y otras estrategias llevadas a cabo en el nombre de la eficiencia han generado considerables costos físicos y psíquicos para la mujer, creándoles múltiples dificultades en el desempeño de sus necesarios papeles sociales, intensificando las exigencias sobre su tiempo y su trabajo, y ahondando las desigualdades de género dentro del hogar y fuera de él.

El descontento con los enfoques anteriores ha conducido al "enfoque de la adquisición de poder", que procura aumentar la confianza de la mujer en sus propios medios como una manera de erradicar las desigualdades sociales de toda índole dentro de los países y entre ellos. Si bien los objetivos a largo plazo de este enfoque no difieren mucho de los del enfoque de la equidad, existe una clara diferencia en materia

de estrategia porque, mientras el enfoque de equidad confía en las estrategias impuestas desde arriba hacia abajo, el enfoque de la adquisición de poder hace hincapié en las organizaciones, la movilización y un estilo de trabajo participatorio en torno a cuestiones específicas.

Esta exposición proporciona una perspectiva desde la cual se puede determinar hasta qué punto se pueden acomodar en la propuesta de la CEPAL las preocupaciones respecto de la prioridad de las políticas para la mujer. La principal preocupación de la CEPAL por la equidad social y la necesidad de introducir medidas redistributivas se refleja hasta cierto punto en el "enfoque de la equidad", cuya atención se centra en la desigualdad de género, y en el enfoque de "la adquisición de poder", con su objetivo a largo plazo de eliminar todas las desigualdades sociales y el énfasis que hace en el logro de la autosuficiencia. La concentración en la transformación del sector productivo y la reestructuración de los procedimientos estatales se vincula estrechamente con el "enfoque de la eficiencia".

Más allá de la similaridad del objetivo general de "equidad", entre el modelo de la CEPAL y algunos de los enfoques de política para ocuparse de las cuestiones de la mujer, quedan ciertas preguntas básicas sin respuesta. Por ejemplo, ¿quién decide lo que es equitativo? ¿Qué grupos pierden o se benefician con la redistribución? ¿Quién fiscaliza el efecto de la pérdida de recursos en algunos grupos? ¿Quién fiscaliza la ganancia de recursos por otros? ¿Es la equidad estática? ¿Quién determina cuándo es necesario efectuar un cambio en la distribución y cómo efectuar ese cambio? ¿Quién tiene la responsabilidad de supervisar el proceso? Estas y otras preguntas similares han tendido a ser pasadas por alto en la justificable preocupación por la difícil situación de los pobres. A menudo hay una tendencia a pasar por alto, o por lo menos a subestimar, el efecto de la redistribución de los recursos en otros grupos además de los pobres y en las relaciones dentro de los grupos y entre ellos. Con frecuencia existe una tendencia a pasar por alto los aspectos de equidad distintos de la redistribución de bienes y servicios. A menudo hay una tendencia a subestimar el efecto de la redistribución "equitativa" en los valores y prácticas convencionales de la sociedad en su conjunto.

Si la ecuación de Moser de la equidad con justicia es correcta, estas consideraciones plantean la cuestión de qué es la justicia y cómo se administra. En un reciente artículo, Jane Jacquette identifica tres criterios en la justicia administrada por tres mecanismos institucionales separados [Jacquette, 1990]. El criterio de igualdad sostiene que los bienes sociales deben distribuirse equitativamente, lo cual es competencia del régimen jurídico. El criterio del mérito sostiene que los bienes sociales deben distribuirse en proporción con las contribuciones productivas en el lugar del mercado. El criterio de la necesidad sostiene que los bienes sociales deben distribuirse a los más necesitados en un sistema determinado por el Estado. Ni los criterios ni las instituciones de justicia son mutuamente excluyentes. Más bien, funcionan en un sistema estrechamente integrado y cada uno depende del otro. De ello se desprende que si se depende exclusivamente de un solo criterio para entregar un nivel aceptable de equidad social o equidad de género, no se logrará el resultado deseado.

Basado en este análisis, el modelo de la CEPAL puede considerarse como ejemplo de una estrategia que centra su atención casi exclusivamente en el lugar de mercado como instrumento para entregar ese tipo de justicia basado en el mérito. Incluso si esto llegara a tener éxito, los otros dos aspectos de la justicia —igualdad y necesidad— no serían abordados, ya que el modelo no dice nada acerca del régimen jurídico y percibe al Estado solamente como proveedor de la infraestructura para el funcionamiento del sistema de mercado. En este sentido, el modelo de la CEPAL parece no ser un vehículo viable para asegurar la equidad social. La inserción de la mujer en la estrategia brinda la oportunidad de presentar un enfoque más holístico que pueda estar en mejores condiciones de asegurar ese ilusivo objetivo de la equidad social.

II. LA MUJER DEL CARIBE EN LOS AÑOS OCHENTA: UN RESUMEN

"Es indispensable que los intereses y problemas de la mujer se incorporen ampliamente en el marco de las políticas nacionales de desarrollo"

Comisión del Sur, p. 139

Para fijar el contexto de la discusión, resulta útil examinar la cambiante situación de la mujer en la subregión durante el decenio pasado. Es importante señalar que ese examen depende de un gran número de fuentes, todas las cuales dependen de sistemas estadísticos de diversos grados de confiabilidad. Los datos macroeconómicos, aunque por lo general están disponibles, normalmente no están desagregados. Los datos sobre el empleo por lo general están desagregados, pero tienden a ser ineficaces para medir la participación económica de la mujer fuera del sector formal. Las estadísticas sociales, aunque se acumulan datos y a menudo en forma desagregada, tienden a no ser publicadas con tanta frecuencia como las estadísticas económicas. Lentamente están comenzando a aparecer los datos de investigaciones a nivel microeconómico, que proporcionan valiosos complementos a los datos macroeconómicos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.²

Cualquier análisis de la situación de la mujer del Caribe durante el decenio de 1980 debe situarse en el contexto de

- i) la situación jurídica;
- ii) el deterioro de las condiciones económicas; y
- iii) los arreglos institucionales existentes para ayudar a las mujeres.

Dentro de cada uno de ellos, se debe tener presente constantemente el papel central que desempeña la "familia" en las vidas de las mujeres y el vínculo entre la actividad productiva y la actividad reproductiva de la mujer. Son estos dos factores los que no sólo definen la especificidad de la mujer sino que determinan también los tipos de desventajas a que están sujetas.

En el Caribe, las mujeres son las únicas responsables de una proporción significativamente elevada de hogares (véase el cuadro 1). Debido a que esas mujeres tienden a ser menos educadas que sus contrapartes masculinos, tienden a experimentar niveles más altos de desempleo. En los casos en que están empleadas, tienden a concentrarse en los trabajos de menor remuneración. La mayoría de los territorios reflejan tasas de fecundidad moderadamente altas. Existe gran variabilidad en las tasas de mortalidad infantil, que fluctúan entre 14 y 45; el extremo superior de esa amplitud es también un

indicador de pobreza. Las tasas de esperanza de vida son por lo general favorables, por lo menos en aquellos territorios respecto de los cuales se dispone de datos, y alcanzan en la región a los 70 años para las mujeres. Por lo que se refiere al nivel de instrucción, está claro que algunos territorios han logrado más éxito en proporcionar educación secundaria tanto a las mujeres como a los hombres, pero que independientemente de la disponibilidad, las mujeres por lo general han sacado partido de lo que hay disponible. Sólo en un territorio el coeficiente mujer/hombre es inferior a 100, y en forma marginal.

Sin embargo, el acceso a la enseñanza no se ha traducido en elevados niveles de empleo entre las mujeres. Entre los trabajadores, las tasas de los hombres superan las de las mujeres en cada territorio, aun cuando hay ciertas variaciones en las tasas de los hombres, que fluctúan entre 42 y 84% (véase el cuadro 2). Por contraste, las tasas de las mujeres son sistemáticamente bajas y fluctúan entre 20 y 55%. En ningún territorio el coeficiente mujeres/hombres se aproxima a 100. Aunque las tasas globales de participación femenina parezcan ser relativamente elevadas, las mujeres están concentradas en una estrecha gama de ocupaciones en que el nivel de los salarios es menor que en las ocupaciones en que predominan los hombres. A pesar de que hay indicios de cambios en algunos sectores, continúa esta característica general de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Los indicadores de desempleo también sugieren disparidades análogas. En todos los territorios las tasas de desempleo de las mujeres superan las de los hombres y en seis territorios el coeficiente mujeres/hombres excede de 100, llegando en un caso a 169. Por consiguiente, las propuestas de transformación productiva con equidad deben hacer frente a este aspecto fundamental de inequidad en la estructura de la fuerza de trabajo.

La capacidad que tienen las mujeres de la subregión para participar en la fuerza de trabajo está circunscrita por la medida en que el régimen jurídico protege sus derechos dentro y fuera de la fuerza de trabajo; la medida en que existen oportunidades en la fuerza de trabajo y la medida en que el Estado proporciona asistencia que les permita desempeñar sus diversos papeles en la sociedad. Estos tres aspectos serán examinados por separado.

1. La situación jurídica³

Gracias al incentivo del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, muchos territorios de la región fueron impulsados a adoptar medidas para mejorar la condición jurídica de la mujer (véase el cuadro 3). Hasta la fecha, 12 de los 13 estados miembros de la CARICOM han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Diez de ellos han ratificado la convención y uno no la ha firmado ni ratificado. Esto significa que la mayoría de los estados miembros de la CARICOM han convenido en tomar medidas para asegurarse de que sus regímenes jurídicos adopten la norma fijada por la Convención para alcanzar justicia igual para todos e iguales derechos para la mujer.

Los sistemas tradicionales de derecho civil de la región centraron la autoridad y la responsabilidad en el varón del hogar. Reformas recientes procuran compartir la autoridad y la responsabilidad de la familia y proporcionar mayores oportunidades para los miembros de la familia mediante servicios jurídicos y sociales. La intención es facilitar "igual participación de hombres y mujeres en la familia, en la comunidad y en los asuntos nacionales e internacionales" [Forde, 1989].

Incluso antes del decenio de las Naciones Unidas, todos los territorios de la región otorgaron a sus ciudadanos igualdad de libertad con arreglo a la constitución, mientras que la mitad de ellos garantizó específicamente la protección constitucional contra la discriminación por motivos de sexo.

Durante el decenio de 1980 varios territorios introdujeron importantes reformas en el derecho de la familia con la finalidad de ayudar a las mujeres y sus hijos. Algunos territorios enmendaron sus leyes de manutención para permitir el apoyo financiero recíproco basado en la necesidad financiera. Algunos revisaron las condiciones de disolución del matrimonio y las llevaron desde los motivos de adulterio, crueldad y deserción hasta el motivo único de ruptura irrecuperable, variando las condiciones estipuladas de un país a otro. Algunos territorios han intentado reformar sus leyes de herencia para asegurar los derechos de los cónyuges de hecho, los cónyuges anteriores que no se han vuelto a casar, los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y las personas a cargo. Varios territorios han adoptado medidas para eliminar la distinción legal entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio y preservar sus derechos de manutención y herencia. Sin embargo, sólo dos territorios han otorgado reconocimiento legal a las uniones consensuales y a las parejas de hecho, y en ambos casos sólo después de una cohabitación continua durante cinco o más años.

En el ámbito del empleo, un gran número de leyes protege los derechos de todos los trabajadores. Todos los países han aceptado el concepto de igual remuneración por trabajo igual, aunque Forde opina que la aplicación de este concepto puede requerir supervisión. Todos los territorios tienen alguna forma de legislación sobre licencia de maternidad destinada a asegurar que no se utilice el embarazo para bajar de categoría, destituir o perjudicar financieramente a una empleada. Esta legislación, cuando se vincula a la seguridad social existente, proporciona una razonable protección en materia de maternidad, aunque el tipo y la cuantía de la protección varía entre los diversos territorios.

En el campo del derecho penal, los problemas más persistentes son los que tienen que ver con los delitos sexuales. Aunque se afirma que "la ley considera que las mujeres de todas las edades deberían estar protegidas contra el abuso sexual" [Forde, 1989, p. 18], en la práctica al parecer ocurre lo contrario. Por ejemplo, sólo un territorio, Trinidad y Tabago, ha modernizado la definición legal de violación para incluir los elementos de imprudencia y consentimiento y la amenaza de daño a otra persona. Asimismo, es el único territorio que ha introducido juicios "a puertas cerradas" para casos de violación, agresión sexual y cualquier delito que afecte a niños; ha prohibido las pruebas que tengan que ver con la historia sexual pasada de la víctima; y ha dejado a la discreción del tribunal el permiso para la publicación de los procedimientos en los medios de comunicación. Un territorio, Barbados, ha legalizado el aborto y otro, San Vicente, ha introducido legislación para proteger a las personas casadas que son víctimas de la violencia en el hogar.

Por lo que se refiere a la ciudadanía, cuatro territorios —Dominica, Guyana, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas— han reformado sus leyes para permitir la completa igualdad de derechos para los cónyuges de sus ciudadanos, ya sean hombres o mujeres.

En resumen, se puede concluir que durante los años ochenta se realizaron progresos muy reales en la subregión en la lucha para eliminar las disposiciones de la ley discriminatorias contra la mujer. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, en la ansiedad por asegurar la igualdad legal oficial en las disposiciones de manutención, tal vez las mujeres hayan terminado en una mayor desventaja financiera que antes.

En el campo del empleo, incluso en aquellos territorios que han tratado de actualizar su legislación laboral, las mujeres que trabajan no están todavía adecuadamente protegidas por los reglamentos de seguridad y salud ocupacional, especialmente en las industrias que tienen que ver con nuevas formas de tecnologías y productos químicos [Antoine, 1990]. Los códigos laborales existentes tienen especial importancia para la mujer en dos aspectos: en primer lugar, porque las mujeres constituyen la principal fuerza de trabajo en el sector manufacturero; y, en segundo lugar, porque las mujeres constituyen la mayor parte de los trabajadores de menores ingresos. Entre los problemas específicos que surgen debido a lo inadecuado de la legislación existente se incluyen los siguientes:

- i) carácter obsoleto, incluso en aquellos territorios que tienen legislación actualizada;
- ii) inaplicabilidad a las industrias modernas y tecnológicamente adelantadas;
- iii) castigos limitados que se imponen a los empleadores que incurren en falta;
- iv) la legislación se ocupa únicamente de la seguridad y no de la salud;
- v) sólo los trabajadores de fábricas están protegidos; y
- vi) falta de reglamentos actualizados.

Otros problemas se relacionan con hacer cumplir la ley y entre ellos se incluyen los siguientes:

- i) muy pocos inspectores de fábricas;
- ii) las organizaciones de trabajadores no están informadas acerca de la ley existente;
- iii) limitadas atribuciones de los inspectores de fábricas;
- iv) limitada capacitación de los inspectores de fábricas y del personal encargado de la seguridad;
- v) falta de equipo e información; y
- vi) muy pocos enjuiciamientos y sanciones.

Por estas razones, las leyes existentes no actúan como un factor disuasivo y las mujeres continúan expuestas a mayores riesgos de salud en su esfuerzo por mantener a sus hogares y familias.

Hacia fines del decenio, los progresos realizados en el mejoramiento de la condición jurídica de la mujer en la subregión había generado tres lecciones importantes: la reforma debe basarse en una cuidadosa investigación sociohistórica que garantice que la reforma propuesta tenga en cuenta las realidades sociales contemporáneas; la reforma debe ir acompañada por un mejoramiento sistemático del aparato institucional jurídico; y la reforma debe ser promovida por medio de programas flexibles de educación pública sobre el derecho.

2. El deterioro de las condiciones económicas⁴

A comienzos del decenio de 1970, los territorios del Caribe habían experimentado un modesto crecimiento económico, habían alcanzado niveles aceptables de vida y estaban tratando de diversificar su base económica para no depender exclusivamente de la agricultura. Sin embargo, todos ellos se caracterizaban por el elevado desempleo, la dependencia estructural respecto de los mercados extranjeros, las limitadas opciones en materia de artículos exportables, y la insuficiencia tanto de los conocimientos administrativos y gerenciales como de los recursos institucionales para sustentar el crecimiento. Además, un débil sector productor de alimentos, un sector manufacturero ineficiente y de costos elevados y un sector turístico fluctuante se combinaban para aumentar las restricciones en que luchaban las economías del Caribe. Sin embargo, a pesar de estas similitudes generales, existían variaciones considerables en lo relativo a base de recursos, calidad de la infraestructura social y económica, nivel de los ingresos por habitante, ideología política y capacidad para manejar sus economías. Todas estas diferencias y similitudes experimentaron una considerable conmoción con la primera recesión económica internacional que se vivió en los primeros años del decenio de 1970, durante la crisis del petróleo. La segunda recesión internacional de principios del decenio de 1980 intensificó aún más esa conmoción. Esta situación, junto con los graves desastres naturales que azotaron a algunos territorios, sirvió para debilitar las economías del Caribe y crear el ambiente para la introducción de programas de ajuste estructural.

En general, la mayoría de los territorios experimentaron tasas moderadas de crecimiento durante los años setenta, pero hacia fines del decenio sobrevino la inestabilidad (véase el cuadro 4). Esta situación se reflejó en el aumento de la inflación, las dificultades del balance de pagos, el aumento del desempleo, el acelerado incremento de la deuda y el crecimiento negativo (véanse los cuadros 5 y 6). Algunos territorios no experimentaron estas últimas dificultades hasta comienzos del decenio de 1980, pero en dos territorios —Jamaica y Guyana— las economías prácticamente se derrumbaron en los últimos años del decenio de 1970 y continuaron la tendencia descendente en los años ochenta, con breves repuntes en la segunda mitad del decenio. El crecimiento económico durante los años ochenta puede caracterizarse entonces como débil en toda la región. La recesión económica mundial ha contribuido sin duda a este débil desempeño, pero también influyeron varios factores internos. Entre las influencias negativas en el desempeño económico nacional, Bourne ha identificado las siguientes: ahorro interno insuficiente, debilidades en la producción e inversiones y operaciones financieras del gobierno (véase el cuadro 7) [Bourne, 1988]. Además, el desempleo y los altos coeficientes del servicio de la deuda siguieron constituyendo problemas insolubles. De este modo, a finales del decenio de 1980 los desafíos que enfrentaba la región en materia de desarrollo eran incluso más agudos que los que había enfrentado dos decenios antes.

El decenio de 1980 presenció también el inicio de los programas de ajuste estructural, es decir, programas destinados a crear condiciones necesarias para el crecimiento autosostenido y para adaptarse a las principales conmociones externas o internas que afectarían al sistema económico. Tales programas se fundamentan en los conceptos vinculados del desarrollo orientado hacia las exportaciones y el crecimiento encabezado por el sector privado. Entre las condiciones que hacen necesaria la introducción de esos programas se incluyen los déficit presupuestarios, el desequilibrio en los pagos de la cuenta corriente, una cuantiosa deuda externa, elevada inflación, escasez de divisas y la aparición de mercados paralelos. Todas estas características se hicieron evidentes en diversos grados en las economías del Caribe durante los años setenta y los años ochenta. Las medidas correctivas prescritas por las dos instituciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han incluido la eliminación de los subsidios y controles de precios, las devaluaciones del tipo de cambio, las congelaciones o reducciones de salarios, la disminución de los gastos públicos, la liberalización del comercio y la reducción del déficit fiscal.

Estas medidas no han reconocido, o aceptado, suficientemente el papel desempeñado por la economía internacional en la creación de las circunstancias en los países en desarrollo que han hecho necesario el ajuste. De este modo, la disminución de la tasa de crecimiento económico en los países desarrollados, la recesión mundial, el creciente proteccionismo contra las importaciones provenientes de los países en desarrollo y las mayores tasas de interés en los países desarrollados han afectado negativamente a las economías en desarrollo. Sin embargo, el peso del ajuste se ha dejado caer de lleno sobre los países en desarrollo deficitarios. Además, es la gente más pobre de los países en desarrollo la que ha soportado la mayor parte del impacto negativo del ajuste. La experiencia de muchos países en desarrollo ha demostrado que, al hacer bajar los salarios y los niveles de vida y reducir los servicios sociales, el ajuste estructural socava el bienestar y la capacidad productiva que necesitan las naciones que efectúan el ajuste para promover su desarrollo. Es más, al despojar a las naciones que efectúan el ajuste del escaso control que tenían sobre sus economías, el ajuste estructural abre sus mercados a la explotación por parte de empresas provenientes de países desarrollados. De este modo, recursos financieros crucialmente necesarios son transferidos año tras año desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados, mientras la pobreza y la intranquilidad social y política fermentan en los países en desarrollo.

Sin embargo, en el Caribe el ajuste estructural no fue el resultado únicamente de factores internacionales, sino también de ciertas debilidades estructurales de largo plazo de las economías del Caribe. Entre ellas se han incluido la insuficiente diversificación económica, el débil sector productor de alimentos que atendía al mercado local y regional, el sector agrícola ineficiente y con costos elevados que producía para el mercado exterior preferencial, el sector manufacturero ineficiente y de elevados costos que producía para el mercado local y regional, y el alto nivel de los hábitos de consumo que reducían la propensión al ahorro y la inversión. A su vez, estas debilidades han afectado la cohesión de los esfuerzos regionales en pro de la integración económica. Así, por ejemplo, la devaluación monetaria y las restricciones a las importaciones introducidas como medidas de ajuste en algunos territorios dieron origen a reducciones en la producción y el empleo en otros.

Estos son problemas con los que los organismos nacionales y regionales han venido luchando desde hace mucho tiempo en la búsqueda de fomentar el proceso de desarrollo. Sin embargo, el concepto mismo de desarrollo ha continuado centrando su atención en la producción y el crecimiento. De este modo, el ajuste estructural no fue considerado como una oportunidad para centrar el proceso de desarrollo en la gente, sino como una estrategia para estimular la inversión productiva y el crecimiento económico. Esto quedó en claro desde la época del primer acuerdo de crédito contingente que Jamaica suscribió con el FMI en 1976. El arreglo concertado posteriormente con arreglo al servicio de financiamiento compensatorio introdujo la primera de una serie de devaluaciones que demostraron claramente las dificultades con que tropiezan las estrategias económicas que no ponen en primer lugar a las personas.

La idea del ajuste estructural a nivel regional no fue introducida hasta 1984, año en que los Jefes de Gobierno de la CARICOM examinaron un informe sobre el tema que fue preparado a solicitud de ellos por el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC). En la declaración hecha por los Jefes de Gobierno —el Acuerdo de Nassau— se reseñaron varias medidas de política que podrían tomarse a nivel nacional y otras que podrían emprenderse conjuntamente. La mayoría de las medidas económicas propuestas seguían las prescripciones del FMI/Banco Mundial, pero se hicieron propuestas separadas para fortalecer el sistema educacional, mejorar el programa de nutrición y cuidado de la salud y reformar el servicio público. Ninguna propuesta se dirigió específicamente a la mujer o a cualquier otro grupo de la población. Sin embargo, por lo menos la preocupación por fortalecer determinados aspectos de la infraestructura social y los tipos de mejoras propuestas para esos sectores señalaron un reconocimiento del carácter de largo

plazo del desarrollo y la necesidad de satisfacer ciertas necesidades básicas de la población. Esto estaba en contraste directo con las fórmulas del FMI y del Banco Mundial que se preocupaban únicamente de los aspectos macroeconómicos del desarrollo reflejados en las cuentas nacionales de los países participantes en sus programas. Sin embargo, a medida que se ponían en práctica las medidas, se hizo evidente una creciente disparidad entre la intención y la realidad.

Es contra este telón de fondo que durante los años setenta y los años ochenta prácticamente todos los territorios de la región adoptaron alguna medida de ajuste a fin de mantener el crecimiento y corregir el déficit de sus balanzas de pago. Solamente cuatro territorios —Dominica, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago— participan actualmente en los programas del FMI, mientras los demás tratan de avanzar según su propia iniciativa.

El efecto inmediato del ajuste ha sido crear graves dificultades económicas y sociales, especialmente entre los más vulnerables, así como condiciones que pueden causar intranquilidad política. Jamaica y Guyana fueron afectados de manera especialmente dura por las primeras, mientras que Trinidad y Tabago ha sido víctima recientemente de estas últimas. Durante el decenio de 1970 y especialmente en el de 1980, los pueblos del Caribe experimentaron un creciente desempleo, disminuciones de su ingreso real, un aumento del costo de la vida, disminución de sus niveles de vida, deterioro de la infraestructura social y física básica, y agotamiento de la fuerza de trabajo capacitada y profesional debido a la emigración. En efecto, en lugar de un desplazamiento hacia una nueva y mejor vía de desarrollo, el ajuste ha servido para empobrecer aún más las ya débiles economías del Caribe (véase el cuadro 8).

Para las mujeres, en todos los territorios de la región, el ajuste ha tenido efectos tanto positivos como negativos. Por el lado positivo, se han creado oportunidades para que las mujeres desarrollen sus habilidades empresariales. Esto se ha hecho especialmente evidente en el rápido aumento del número de mujeres participantes en el comercio, en el número creciente de mujeres que han abierto pequeñas empresas comerciales y el número pequeño pero creciente de mujeres que ha ingresado en los puestos directivos del sector comercial. Estas oportunidades han brindado posibilidades de movilidad ascendente para algunas mujeres.

Por el lado negativo, el ajuste ha dado por resultado que muchas mujeres han quedado desempleadas. Para contrarrestar esta situación, las mujeres ingresaron, en busca de ingresos, en el sector informal, en actividades ilegales y otras actividades antisociales y en las zonas francas existentes. Su participación en estos campos simplemente aumentó su vulnerabilidad. Su menor acceso a los servicios sociales y otros servicios esenciales, el aumento del costo de la vida y la mayor tensión asociada con el hecho de tratar de ganarse la vida y subsistir afectaron no sólo a la capacidad de la mujer de obtener un ingreso, sino para mantener su propia salud y la de sus hijos y otros adultos a su cuidado.

En última instancia, los efectos negativos al parecer han pesado más que los positivos. El resultado ha sido una incapacidad creciente de las mujeres para desempeñar los papeles que la sociedad espera de ellas, mientras que al mismo tiempo aumenta la presión que se ejerce sobre ellas para que desempeñen esos papeles. Como madres y administradoras del hogar, la reducción de su capacidad para obtener ingresos y acceder a servicios sociales básicos disminuye su capacidad para funcionar eficazmente como encargadas de cuidar a otras personas. Su papel productivo se ha visto comprometido por la pérdida del empleo e ingreso. Como organizadoras de la comunidad, están obstaculizadas por el tiempo cada vez mayor que tienen que dedicar a mantener sus hogares.

En la breve reseña siguiente se describen los efectos experimentados por la mujer en tres campos fundamentales: el empleo, la salud y la educación.

a) Empleo

Las mujeres del Caribe tienen un historial de tasas relativamente elevadas de participación en la fuerza de trabajo en comparación con otras regiones del mundo en desarrollo. Asimismo, las mujeres constituyen una proporción relativamente alta de la fuerza de trabajo total. Aunque esas tasas han venido disminuyendo desde fines del siglo XIX, especialmente después de 1950, hubo señales de recuperación después de 1970. Para 1980 las pruebas disponibles demostraban que la población femenina trabajadora había aumentado, que las mujeres constituyan una proporción creciente de la fuerza de trabajo y que las mujeres se habían desplazado desde la agricultura hacia los sectores mejor remunerados de los servicios y la industria (véanse los cuadros 9 y 10). En los tres territorios en que se realizan encuestas continuas por muestreo —Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago— está claro que el tamaño absoluto de la fuerza de trabajo femenina ha aumentado en forma constante durante los años ochenta (véase el cuadro 11).

Sin embargo, un examen más detallado revela que esos incrementos ocultan varias características importantes de la fuerza de trabajo femenina en la subregión. La primera es la preponderancia de las mujeres en el extremo inferior de la escala ocupacional (véanse los cuadros 12 y 13). En el sector manufacturero, esto coloca a la mayoría de las mujeres que trabajan en el nivel mínimo laboral, como maquinistas. En la agricultura, las mujeres se concentran en las ocupaciones de oficina (incluida la entrada de datos) y los servicios personales. Más detalles correspondientes a un territorio, Barbados, ilustran la situación durante los años ochenta (véase el cuadro 14). Desde 1980, a pesar de leves cambios en la distribución ocupacional de la fuerza de trabajo femenina, persiste la situación en que las mujeres predominan en las ocupaciones relacionadas con ventas, servicios y oficinas, mientras que los hombres son más numerosos en las ocupaciones profesionales y administrativas. Los datos provenientes de otros territorios revelan una modalidad similar, aunque para un territorio —Jamaica— existen informes de que hay un número cada vez mayor de mujeres en los puestos profesionales y directivos.

La segunda característica es la creciente participación de las mujeres en el sector informal, es decir, ese sector en que las actividades no están reglamentadas, son en pequeña escala y no son medidas en las cuentas nacionales. Tradicionalmente, se ha considerado que las mujeres dedicadas al servicio doméstico, el comercio de menor cuantía y la costura operan en los márgenes de la economía y por lo tanto en el sector informal. En el único estudio realizado en la subregión que se ocupa del sector informal, se ha ideado un sistema que asigna a las industrias a diferentes segmentos del mercado de trabajo sobre la base del número de trabajadores que tienen y un índice específico de habilidades basado en los requisitos de educación y capacitación de cada industria [Anderson, 1987]. Esta asignación produce cuatro segmentos que comprenden el sector informal: los artesanos informales, los trabajadores informales protegidos, los trabajadores informales no protegidos y los agricultores en pequeña escala. Aplicando esto a la fuerza de trabajo existente, los datos de la encuesta para Jamaica han ilustrado que el sector informal aumentó de 128 000 en 1977 a 203 100 en 1989 y que la participación femenina ascendió a 68% durante el período [Anderson y Witter, 1991]. Dentro del sector, la mayoría de las mujeres que trabajaban (84%) estaban en el servicio doméstico y el comercio de menor cuantía, proporciones que permanecieron prácticamente sin modificaciones durante el período, aunque los números absolutos en estas dos categorías habían aumentado en 53%, de 75 400 a 115 200. Por contraste, la participación masculina en el sector se concentra en las artesanías y el comercio de menor cuantía, que correspondieron a 73% de su número

en 1989, un aumento con respecto al 69% en 1977. De este modo, incluso en el sector informal, existen elementos de segregación ocupacional.

La tercera característica de importancia es que aunque las tasas de participación femenina en la fuerza de trabajo están aumentando, continúan siendo más bajas que las tasas de participación masculina. Además, el aumento de las tasas de participación femenina va acompañado por un aumento de las tasas de desempleo femenino, que continúan siendo más elevadas que las tasas masculinas. El desempleo femenino es especialmente elevado entre las mujeres de menos de 30 años de edad, precisamente el período en que su responsabilidad por sus hijos pequeños se encuentra en su punto máximo.

Los efectos más importantes de las medidas de ajuste estructural sobre las mujeres como actores económicos se han hecho sentir en los niveles de empleo, el valor de los salarios reales y las condiciones de trabajo. Disminuciones significativas en los dos últimos se han combinado para aumentar el costo de la vida y, por lo tanto, la presión ejercida sobre las mujeres para que satisfagan las necesidades básicas en materia de energía y nutrición para sus hogares. Los niveles generales de empleo de mujeres fluctuaron en aquellos territorios respecto de los cuales se dispone de datos. En forma generalizada se cree que un número considerable de mujeres ingresó al sector informal, pero las estimaciones de su número son difíciles de obtener y en los casos en que existen son sólo parciales. En el sector formal, los aumentos en las nuevas oportunidades, especialmente en la industria manufacturera, al parecer no han sido suficientemente grandes para compensar las disminuciones en otras esferas, por ejemplo, la agricultura. Además, a medida que se producían cambios en el entorno del sector en particular —cambios tecnológicos, traslado del emplazamiento de la industria, problemas económicos conducentes al cierre de la fábrica— las mismas mujeres que se habían beneficiado al comienzo eran las que sufrían con la reducción. Esto ha ocurrido en Jamaica, Barbados y San Vicente. Por esta razón, la introducción de zonas francas industriales enfrentó una tenaz oposición en Trinidad y Tabago. En la agricultura, la sostenida declinación del empleo de ambos sexos ha sido una tendencia especialmente marcada en el Caribe. Los esfuerzos por estimular la agricultura con arreglo a los programas de ajuste existentes no han logrado todavía resultados notables.

En definitiva, las mujeres han sufrido tanto debido a las medidas de ajuste que causaron despidos como debido a las que crearon empleo. Las pérdidas de empleos significaron carencia de fuente de ingresos o ingreso en el mercado informal en un momento en que, aunque existían oportunidades de desarrollo comercial, muchas de esas actividades rayaban en lo ilegal o efectivamente era ilegales. Las oportunidades de empleo se presentaban principalmente en las zonas francas industriales, donde las condiciones de trabajo reforzaban la vulnerabilidad de las mujeres. En cualquier caso, la caída del valor de los salarios reales y el alza de los precios significan que las mujeres tienen que dedicar más tiempo y hacer gala de una mayor ingeniosidad para asegurar un mantenimiento adecuado del hogar con los limitados recursos financieros disponibles. El problema, desde luego, consiste en que, como se ha señalado respecto de América Latina, existen límites mentales y físicos para el esfuerzo y la creatividad [de Barbieri y de Oliveira, 1991].

b) Salud

Los territorios de la subregión heredaron como legado colonial un sistema de salud pública de un nivel relativamente alto. Esto ha proporcionado indicadores de salud que se comparan favorablemente con los de muchos países más grandes y más desarrollados. Por ejemplo, la esperanza de vida es de más de 60 años en varios territorios y superior a los 70 en por lo menos tres. La mortalidad infantil es inferior a 30 por mil en diez territorios y superior a 30 por mil en cinco. Los datos oficiales de algunos territorios

(por ejemplo, Guyana) sugieren un aumento constante de la mortalidad infantil durante el decenio y una disminución constante en otros (por ejemplo, en Trinidad y Tabago). Sin embargo, los datos de las encuestas sugieren que en varios territorios puede haber un subregistro considerable. Asimismo, las tasas de mortalidad de la primera infancia aparecen bajas en comparación con otras regiones en desarrollo, pero los datos de encuestas no publicadas sugieren posibles aumentos.

Las dificultades económicas de los años ochenta han creado problemas específicos para las mujeres del Caribe. Como en todas las demás partes del mundo, la prestación de atención médica curativa y preventiva dentro de los hogares constituye una proporción significativa de las actividades de producción doméstica de las mujeres en la subregión [Leslie y otros, 1988]. Las mujeres predominan también en la atención de la salud proporcionada por el Estado y de este modo figuran en lugar prominente como usuarias de los servicios disponibles. Cuando las mujeres se dedican a la actividad económica, acceden a un ingreso que puede contribuir a la salud y nutrición de la familia. Sin embargo, aumentan también sus propios riesgos de salud al alargar su jornada de trabajo y reducir el tiempo para el descanso y la relajación cuando la situación económica se deteriora. Las condiciones de salud, especialmente las de los grupos vulnerables, empeoran cuando las mujeres pierden sus trabajos o cuando disminuye su salario real, tornándose incapaces de prestar atención de salud para ellas mismas y las personas a su cuidado. Los indicadores generales de la salud basados en los datos sobre mortalidad comienzan a reflejar ese deterioro. Los niveles de mortalidad general comienzan a mostrar señales de aumento. Jamaica ha sido el territorio en que estas tendencias han sido mejor documentadas [Boyd, 1988]. Se ha sostenido que en ese territorio la disminución en el estado nutricional de los niños de menos de 4 años, de 38% en 1978 a 41% en 1985, simboliza el efecto de la crisis [Antrobus, 1988].

Los problemas de salud de las madres también parecen estar aumentando, aunque éstos no se reflejan necesariamente en los datos disponibles. Varios territorios han informado acerca de aumentos en materia de anemia, mortalidad derivada de la maternidad y morbilidad general entre las mujeres, resurgimiento de ciertas enfermedades contagiosas y un aumento de la incidencia de enfermedades mentales resultantes de la tensión o fatiga nerviosa. Sin embargo, no se dispone de los datos cuantitativos para apoyar estas observaciones.

Se ha mencionado que el principal factor que contribuye a estas tendencias es la reducción del gasto público en servicios de salud, gasto que ha venido disminuyendo constantemente desde 1980, especialmente en Guyana y Jamaica [Neil, 1990]. Estas reducciones han significado la pérdida de empleos del personal de los servicios de salud, la mayoría de los cuales son mujeres, la migración de una proporción significativa de los profesionales de la salud, la introducción de cobros a los usuarios por servicios y suministros, la escasez de suministros y el deterioro tanto de la infraestructura física como de la capacidad para mantenerla. Al mismo tiempo, el énfasis oficial en las ventajas de la atención primaria de la salud no reconoce el elevado costo en tiempo, energía y dinero que significa para las mujeres, de quienes depende el éxito de la estrategia. Se necesita más tiempo para participar en clases de salud y nutrición o para desempeñarse como agente sanitario no remunerado de la comunidad. Se necesita dinero en efectivo para pagar los costos de transporte para cualquiera de estas actividades y, en los casos en que se han introducido los cobros a los usuarios, para pagar los servicios y medicinas. Para lograr éxito, las estrategias de atención primaria de la salud requieren el libre acceso a las medicinas y otra tecnologías; el acceso a la planificación de la familia a fin de reducir el tiempo dedicado a la procreación y cuidado de los niños; movilización de la comunidad para iniciar y mantener programas de atención de la salud que ayuden a las mujeres en sus tareas tradicionales. El Estado fue incapaz de proporcionar todos estos servicios. Sin ellos y con asignaciones presupuestarias reducidas a los servicios

de salud, el nivel de prestación de servicios públicos de atención de la salud en algunos territorios se ha deteriorado en grados alarmantes.

Como resultado, cada vez es más difícil para las mujeres proporcionar atención de la salud para sí mismas y para sus hijos u obtener servicios médicos cuando hay que pagar honorarios. Para las que se las arreglaron para retener su empleo, su incapacidad de proporcionar una dieta equilibrada debido a los mayores costos de los alimentos puede perfectamente haber afectado su productividad, aunque no disponemos de los datos para ilustrar esta afirmación. En realidad sólo se dispone de limitada información sobre la relación entre la salud y la productividad, pero los datos disponibles muestran un efecto positivo [Banco Mundial, 1990]. Por contraste, existen varios estudios que apuntan claramente hacia un efecto positivo entre la nutrición y la capacidad de un niño de aprender. Por extensión, esto podría significar un efecto positivo en la productividad cuando el niño ingrese en la fuerza de trabajo, suponiendo que se mantengan los niveles adecuados de nutrición. Es necesario que en los programas que procuren alentar los arreglos económicos que requieren niveles superiores de productividad se tengan constantemente presentes no sólo estas relaciones, sino también el papel que le cabe a la mujer en lo que se refiere a contribuir a la dirección y fortaleza de esas relaciones.

c) Educación

Hasta el comienzo del decenio de 1980, los indicadores de entrada han permanecido prácticamente sin variaciones en el nivel primario con más del 90% de los niños y niñas de 5 a 14 años de edad matriculados en la escuela. Las niñas representan el 50% de la población escolar primaria. A nivel secundario, está matriculado aproximadamente el 40% de los niños y alrededor del 45% de las niñas, con lo cual las niñas representan poco más del 50% de la población escolar secundaria. Los indicadores de rendimiento no indican ningún cambio general de la situación y hay pocas diferencias entre las tasas de rendimiento de hombres y mujeres. A través de todos los territorios, el porcentaje de la población adulta que alcanza la educación de nivel secundario es de 11% a 42% para los hombres y de 14% a 42% para las mujeres. La diferencia entre los géneros ha tendido a favorecer a las mujeres. A nivel terciario existe un marcado predominio de los hombres con respecto a las mujeres, aunque las tasas para ambos sexos están por debajo del 5%. En cuanto a certificación, menos del 20% de la población adulta ha recibido certificados de nivel secundario, y las mujeres constituyen el 60% de ese grupo.

Esta situación relativamente favorable disimula ciertas características que socavan la calidad efectiva del sistema educacional. Por ejemplo, en Kingston, Jamaica, existe hacinamiento escolar en las zonas urbanas mientras los locales disponibles en las zonas rurales son subutilizados. No son poco comunes las proporciones de alumnos por maestro superiores a 1:30 e incluso 1:40 [Neil, 1990]. Estas deficiencias han sido exacerbadas aún más por la crisis económica. Las reducciones en los gastos públicos en educación ha dado por resultado un deterioro constante del inventario físico y de la infraestructura del sistema escolar, despidos y renunciadas en el servicio docente, reducciones en los programas de capacitación de maestros, carencia de material didáctico y una baja considerable de las aprobaciones de exámenes en por lo menos tres de los territorios con programas de ajuste estructural del FMI/Banco Mundial. En otros territorios que tratan de aplicar un ajuste por cuenta propia, se están experimentando dificultades similares, aunque tal vez no en la misma medida de esos tres.

Para algunas mujeres, esta situación ha significado pérdidas de empleos y para otras, pérdida de acceso a la educación básica que podría permitirles encontrar empleo. Para todas las mujeres ha aumentado el tiempo que tienen que dedicar actualmente a los hijos en un intento por proporcionarles

algún elemento de educación básica. Asimismo, la medida en que ejercían control sobre sus hijos puede haber disminuido. Mientras las madres tratan de lograr un ingreso, no hay supervisión para los hijos que al parecer están abandonando la escuela en un número cada vez mayor como consecuencia de una falta de confianza en el sistema educacional. Esta situación tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo humano general y para los programas relacionados con la transformación productiva.

3. El marco institucional

Después de la preparación de un Plan de Acción Regional en 1977 y del llamamiento a establecer un mecanismo institucional para la "integración de la mujer en el desarrollo", cada territorio estableció alguna forma de mecanismo de "asuntos de la mujer" dentro del sector público (véase el cuadro 15). Además, cuatro territorios designaron comisiones de corto plazo y tres han creado consejos o comités asesores permanentes. Por consiguiente, se puede afirmar que la región dispone del mecanismo institucional para adelantar los asuntos de la mujer.

Sin embargo, la experiencia histórica de esas entidades ilustra claramente que la creación de mecanismos institucionales sin los apropiados recursos financieros, de personal y de infraestructura impide que esos mecanismos cumplan con su mandato. Además, su marginalización dentro del servicio público efectivamente les impide participar en cualquiera de los órganos gubernamentales que tienen que ver con la adopción de políticas económicas. Esta debilidad a nivel nacional se manifiesta también en las instituciones regionales. De este modo, el aporte de las oficinas nacionales de mujeres a estos programas es limitado por la debilidad de estas entidades y el seguimiento es obstaculizado por las limitaciones de la propia Oficina de la Mujer dentro de la CARICOM. Por ejemplo, la cuestión del impacto de las medidas de ajuste estructural sobre la mujer fue un punto del temario de la tercera y de la cuarta reunión de los ministros encargados de los asuntos de la mujer, en 1985 y 1988, respectivamente. En la reunión de 1985 se recomendó que "la Secretaría de la CARICOM debería establecer un mecanismo para analizar y evaluar el efecto de las medidas [de ajuste estructural] en la mujer y formular recomendaciones a nivel nacional que amortigüen el efecto negativo sobre las mujeres y, además, les permita contribuir a la aplicación efectiva de las políticas de ajuste". En la reunión de 1988, los ministros reiteraron ese llamamiento y convinieron en señalar esta materia a la atención de los funcionarios nacionales encargados del comercio, la industria y la planificación económica. Hasta la fecha no se han tomado medidas respecto de ninguna de estas recomendaciones "debido a limitaciones de tiempo y de fondos". Evidentemente, si la Secretaría y los propios ministros hubieran considerado importante esta materia, se habría encontrado el modo de remedir esas limitaciones, como se ha encontrado para otros asuntos.

Las otras dos instituciones regionales claves que participan en la adopción de decisiones económicas importantes en la región —la Secretaría de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) y el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)— jamás han creado una oficina o dependencia de la mujer en sus establecimientos. Como resultado, sus principales documentos de política económica hacen poca o ninguna referencia a la mujer. Por ejemplo, en su declaración anual de 1984, el Presidente del Banco de Desarrollo del Caribe se refirió específicamente al ajuste y la recuperación en las economías de la CARICOM. En la declaración se reconoce que el ajuste estructural es un proceso sumamente doloroso y traumático para la población de cualquier país, en particular los grupos más pobres. Sin embargo, no reconoce el diferente efecto que tienen esas políticas en las mujeres y en los hombres. La declaración de 1986 fue la primera en que se mencionó a las mujeres, lo que se hizo en el contexto de un análisis en que se relacionaba el aprovechamiento de los recursos humanos con el desarrollo económico. Aunque ese enfoque representó una desviación significativa con respecto a la presentación tradicional de informes

económicos, sin embargo no aplicó una perspectiva de género al análisis. De este modo, la referencia a la mujer se limita a una somera exposición sobre la "mujer en el desarrollo".

Las instituciones regionales han desempeñado, y sin duda continuarán desempeñando, un destacado papel en cuanto a influir en las estrategias de desarrollo de los territorios. La experiencia y el debate sobre el ajuste estructural en la región ha puesto manifiestamente de relieve la importancia de un desarrollo que se centre en las personas más bien que en la productividad. Dentro de esa concepción es crucial el diferente efecto que tienen las estrategias de desarrollo en los hombres y en las mujeres. Si las instituciones regionales de desarrollo del Caribe han de proporcionar el ambiente económico sustentador que se necesita, tendrán que institucionalizar los intereses de la mujer dentro de sus propias estructuras y programas y utilizar ese mecanismo para ayudar a los gobiernos nacionales a hacer lo mismo.

4. Lecciones que se han aprendido gracias a la experiencia de los años ochenta

La experiencia combinada del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y de los programas de ajuste estructural en la región han servido para ofrecer varias lecciones que tienen que ver con las preocupaciones por la equidad social y los intentos de modificar las estructuras de producción.

La primera lección es la necesidad de reiterar constantemente la lección básica del Decenio de las Naciones Unidas, a saber, el vínculo que existe entre la producción de bienes y servicios económicos y la reproducción y mantenimiento de los recursos humanos. Los primeros esfuerzos durante el decenio se concentraron únicamente en este vínculo entre lo productivo y lo reproductivo, pero en trabajos posteriores se hizo hincapié en el carácter multifacético de los papeles desempeñados por la mujer. La Secretaría del Commonwealth centró su atención en cuatro de esos papeles: productoras, administradoras del hogar, madres y organizadoras de la comunidad [Secretaría del Commonwealth, 1989]. La OIT ha identificado siete: ocupacional, maternal, conyugal, doméstico, pariente, comunidad e individual [Oppong, 1980]. Independientemente del número que se escoja, el punto importante es la multiplicidad, la relación entre ellos y el hecho de que la sociedad exige a las mujeres que desempeñan todos esos papeles. Si bien esta lección básica puede ser conocida, comprendida y aceptada por los funcionarios de ejecución de la Unidad Mujer en el Desarrollo, tal vez ello no ocurra con los encargados de formular políticas y de llevarlas a la práctica. A menudo pueden estar dispuestos a referirse a la existencia de procesos inequitativos de asignación de recursos, pero a menudo pueden no estar dispuestos a aceptar el sesgo de género contenido en ese aspecto de la falta de equidad. Es preciso hacer continuamente hincapié en este punto.

La segunda lección, que se deriva de la experiencia del ajuste estructural, es la importancia crítica que tiene comprender el medio social, económico y político existente a nivel nacional, regional e internacional. En particular, existe la necesidad de comprender la situación de los países industrializados que, casi sin excepciones, experimentan también graves problemas de ajuste. Al tratar de hacer frente a sus propios problemas, las medidas que adoptaron —por ejemplo, aumento del proteccionismo, elevadas tasas de interés— perjudicaron a los países más pobres y les dejaron pocas posibilidades de reaccionar. Además, estos últimos países se encuentran desplegando todos sus esfuerzos para acumular divisas que son repatriadas a los países industrializados en la forma de reembolso de la deuda, sin que quede nada para los fines de desarrollo interno. Ello significa que con poca o ninguna inversión, se puede lograr poco o ningún crecimiento y, por lo tanto, el logro de la equidad social se hace mucho más difícil.

La tercera lección ha consistido en que no sólo las mujeres pobres son afectadas por los principales cambios económicos. Prácticamente todas las mujeres tienen la responsabilidad de la administración cotidiana del hogar, sean o no sean jefas de hogar. Prácticamente todas las mujeres tuvieron que hacer frente directamente a los efectos generalizados del ajuste estructural, lo cual se reflejó en la pérdida de sus trabajos, la disminución de sus salarios reales, la reducción o eliminación de los subsidios, la liberalización de los precios, la devaluación y los cargos por los servicios públicos. Trabajos recientes han demostrado que el principal resultado de esta situación ha sido la caída en la miseria de las mujeres que previamente eran pobres y el empobrecimiento de las que estaban un poco mejor económicamente [Massiah, 1990b]. Por consiguiente, los programas interesados en la equidad social que centran su atención únicamente en las mujeres pobres o en la miseria no consideran las necesidades de un número considerable de mujeres, que se supone son capaces de resolver sus propios problemas, pero cuya capacidad para hacerlo ha sido socavada por la pérdida de las herramientas mismas que utilizaban con tal fin.

La cuarta lección es que del mismo modo que en los primeros años del Decenio de las Naciones Unidas se reconoció que las mujeres no eran beneficiarias pasivas del desarrollo sino que contribuían activamente al proceso de desarrollo, ahora tiene que reconocerse que las mujeres no son receptoras pasivas de los efectos negativos de las malas condiciones económicas. Más bien, son ingeniosas creadoras de estrategias que no sólo hacen frente a la adversidad económica, sino que también pueden conducir a creadores proyectos/programas de desarrollo fundados en las fuerzas culturales de la población. Es necesario que los planificadores de programas y proyectos se basen en esas fuerzas.

La quinta lección es que los países del Caribe miembros del Commonwealth gozan de ciertas circunstancias favorables que pueden utilizar ventajosamente al hacer frente a los desafíos de los años noventa.⁵ Entre esas ventajas se pueden incluir las siguientes:

- favorable ubicación geográfica;
- una dotación relativamente buena de recursos naturales, especialmente si se agregan las zonas económicas exclusivas;
- niveles relativamente buenos de educación y capacitación;
- estabilidad política;
- estrecha proximidad de unos a otros en cuanto a geografía, vínculos históricos y procedimientos administrativos;
- vibrante tradición cultural;
- acceso preferencial a tres importantes mercados mundiales: los Estados Unidos de América (por intermedio de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe), el Canadá (por intermedio de la CARIBCAN) y la CEE (por intermedio de Lomé);
- lo que es más importante, considerable experiencia en materia de administración propia y cooperación mediante mecanismos formales (por ejemplo, instituciones regionales) e informales (por ejemplo, individuos, familia y redes de organizaciones no gubernamentales).

Todos estos factores han permitido que los territorios del Caribe miembros del Commonwealth sobrevivan, incluso que algunos prosperen, en un medio económico cada vez más hostil.

La sexta lección es que, a pesar de la generalización de una ideología de género sesgada hacia el hombre, que se evidencia en la continua debilidad de los mecanismos gubernamentales que se ocupan de los asuntos de la mujer y en la limitada participación de la mujer en la toma de decisiones políticas y económicas, existen indicios del surgimiento de un medio más receptivo en materia de políticas que el existente hace 15 años. Esto puede apreciarse en la cada vez mejor disposición de los tecnócratas claves para participar en deliberaciones que van más allá de la cuestión general de la injusticia de la discriminación de géneros y hacia el examen de cómo un enfoque que tenga en cuenta el género podría mejorar la eficacia de las políticas existentes y ayudar en la formulación de las políticas futuras. Se puede apreciar asimismo en la creciente buena disposición —evidenciada en la CER— de aceptar a las organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales centran su atención en la mujer, como agentes de desarrollo y participantes en el diálogo sobre desarrollo. De este modo, se está estableciendo lentamente la base para introducir colectivamente elementos de cambio social y económico. Se trata de una oportunidad que hay que aprovechar y explotar al máximo.

La última lección pertinente al presente análisis se refiere a la necesidad de educar a la gente acerca del cambio social. Si se desea pedir a las personas que participen en procesos fundamentales de cambio social, deben comprender por qué es necesario el cambio, qué tipo de cambio se propone, cuáles son las consecuencias del cambio para ellas y su sociedad, y en qué forma se llevará a la práctica dicho cambio. Esto es especialmente importante en caso de que sea probable que los cambios propuestos introduzcan condiciones difíciles en las vidas de las personas. El cambio tiene lugar en un proceso continuo de flujo y reflujo, estímulo y respuesta, hechos positivos y negativos. Aun cuando el cambio sea alentado en una dirección específica, el progreso a menudo no avanza en una sola línea. Es necesario que la población tome conciencia de estos procesos. La cuestión va más allá de la participación de organizaciones oficiales y no oficiales en el diálogo. Exige programas públicos masivos de toma de conciencia, en que se utilicen todos los recursos de los medios de comunicación, se fomenten las deliberaciones a nivel de la comunidad y se incluyan en la propuesta sugerencias provenientes de esas fuentes. De esta manera, se hace posible reunir apoyo para las propuestas de cambio y, es de esperar, evitar las dificultades del rechazo y tal vez incluso la intranquilidad social y política.

III. ESTRUCTURAS DE PRODUCCION Y EMPLEO DE LA MUJER

"El trabajo de la mujer es vital para la producción de bienes y servicios"

Comisión del Sur, p. 137

Los dos sectores claves en el modelo de la CEPAL para la transformación productiva son la agricultura y la industria manufacturera, de las cuales se dice que ofrecen significativas posibilidades de crear vínculos con las políticas de producción para la exportación. En estos sectores también se han fijado objetivos en el Caribe. En la agricultura se ha hecho hincapié en el objetivo de lograr la seguridad alimentaria regional en la mayor medida que sea posible. En la industria manufacturera se hace hincapié en la identificación de posibilidades de los mercados de exportación. Además, la propuesta de la CER pone énfasis en la producción de servicios. Entre ellos se considera que se incluyen los servicios de turismo, financieros, profesionales, de entretenimiento y otros servicios culturales, así como los servicios educacionales, médicos, de telecomunicaciones y de información. Por contraste, el modelo de la CEPAL interpreta los servicios solamente en un contexto de infraestructura, es decir, servicios de transporte, telecomunicaciones e información en la medida en que se refieren a la producción.

Los cambios en la estructura de la producción y el empleo en cada uno de estos sectores serán examinados brevemente, junto con ejemplos de intentos recientes para mejorar la situación de la mujer en cada sector.

1. Agricultura

Tradicionalmente, la agricultura ha sido el sector clave de exportación de la región, con una gran concentración en los cultivos primarios sin elaborar o semielaborados: bananos, cacao, café, arroz y azúcar. Sin embargo, esta tendencia ha experimentado cambios significativos, en parte como resultado de los cambios del mercado y en parte debido a las dificultades internas del sector mismo. Para detener la caída en el sector, se han desplegado esfuerzos para estimular la producción de artículos no tradicionales, tales como flores, plantas ornamentales, frutas exóticas y legumbres de invierno para el mercado de exportación, pero estos esfuerzos no han comenzado todavía a cambiar la suerte del sector.

La estructura de este sector se puede describir como de tres niveles. Las propiedades tipo plantaciones en gran escala tienden a concentrarse en un solo producto para la exportación a mercados extrarregionales. El cacao, el arroz y el azúcar constituyen ejemplos de exportaciones de tales predios. El número de esos predios tiende a ser limitado, pero la superficie de terreno cultivable que abarcan es por lo general muy grande. En el otro extremo de la escala está un vasto número de predios campesinos

en pequeña escala (menos de cinco acres) que están dedicados a la producción de cultivos alimentarios para el consumo interno. En algunos casos, los excedentes se venden en los territorios vecinos. Entre los dos extremos se hallan los predios de tamaño mediano en los que a menudo se intenta un tipo de agricultura mixta para atender tanto a los mercados extranjeros (frutos cítricos y banano) como a los mercados locales (cultivos alimentarios).

Pese a esta aparente variedad, los datos disponibles sugieren una disminución constante y significativa del papel de la agricultura en la región (véase el cuadro 16). Entre las pruebas que apoyan esta afirmación se incluyen la baja de la participación de la agricultura en el PIB nacional, la caída de los niveles de producción, una disminución de la superficie explotable bajo cultivo, una reducción del empleo en la agricultura, menores utilidades de la agricultura de exportación y un costo total siempre creciente de las importaciones de alimentos.

En resumen, la agricultura de exportación tradicional ha disminuido significativamente y cabe mencionar la caída en más del 50% del volumen de las exportaciones regionales de azúcar desde los primeros años del decenio de 1970. La producción interna de cultivos alimentarios también ha disminuido drásticamente como queda en evidencia con el nivel del costo total de las importaciones regionales de alimentos de 1 300 millones de dólares de los Estados Unidos o una décima parte del gasto nacional bruto.

Varios factores han contribuido a estas tendencias. Dentro del sector, los problemas estructurales incluyen la disminución de la superficie cultivada, el pequeño tamaño medio de las granjas y el progreso técnico insuficiente. Desde el punto de vista de las políticas, la fijación inadecuada de los precios de los productos, los servicios de crédito inefectivos y los débiles vínculos intersectoriales, especialmente con la industria, limitan la eficacia del sector. Lo mismo ocurre con el débil desempeño de la economía en general.

El subsector de la agroindustria es afectado por estos y otros factores, ya sea que la preocupación se centre en las operaciones familiares que se realizan en el hogar, industrias domésticas independientes, laboratorios químicos o industrias comerciales en gran escala. Internamente, el subsector está limitado por conocimientos técnicos insuficientes, modernización mínima de los equipos y capacidad excesiva de producción causada por la irregularidad de la cantidad y la calidad de las materias primas. Además, factores externos como la escasez de divisas, los elevados costos de financiamiento y los altos aranceles de los insumos importados también limitan la capacidad del subsector.

Los limitados datos de nivel microeconómico de que se dispone para ubicar a las mujeres dentro de este escenario se originan de estudios de investigación relacionados con el papel de la mujer en el subsector de la pequeña agricultura. Los datos de nivel macroeconómico sobre el empleo agrícola emanan principalmente de los censos de población o agropecuarios, que tienden a sugerir que las mujeres tienen una participación mínima en la agricultura. Sin embargo, los datos a nivel microeconómico proporcionan indicios de que las mujeres participan en gran medida en las actividades agrícolas: como jornaleras en las plantaciones, como agricultoras en los predios agrícolas en pequeña escala y como comercializadoras de productos agrícolas. Un número muy pequeño de mujeres figura como técnicas sobre el terreno y profesionales en los ministerios de agricultura. El material de investigación de que se dispone sobre los otros grupos proporciona una visión general que se ha resumido de la siguiente manera [Massiah, 1990a].

a) Características demográficas:

Su edad media es de más de 40 años; sus niveles de instrucción son generalmente bajos y fluctúan desde ninguno hasta enseñanza primaria completa; viven en un matrimonio o una unión consensual y varias afirmaron ser la jefa del hogar aun cuando estuviera presente una pareja masculina; el tamaño medio de su familia fluctúa entre 4 y 7 personas; sus hogares tienden a albergar a dos o tres generaciones y todos sus miembros participan en una u otra de las actividades agrícolas.

b) Trabajo agrícola:

Invariablemente su ingreso en la agricultura tuvo lugar debido a la falta de conocimiento y capacitación en cualquier otra cosa y por haber sido criada en una comunidad agrícola. Las jornadas laborales son largas y se dividen entre los quehaceres domésticos, el cuidado de los hijos, los viajes (por lo general caminando) entre su hogar y el lugar de su trabajo agrícola, el trabajo de la tierra y a menudo la venta de los productos agrícolas. Además, algunas de ellas producen artesanías, crían ganado y mantienen huertos para obtener ingresos adicionales. Un estudio ha demostrado que las mujeres campesinas dedican a actividades laborales 13 de las 16 horas que pasan despiertas.

c) Información sobre agricultura:

Sus conocimientos sobre agricultura por lo general provienen de sus padres, su pareja y otros agricultores, ya sea verbalmente o por observación. Los funcionarios de extensión agrícola no figuraron de manera prominente como fuentes de información, ya que eran considerados poco confiables, incapaces de proporcionar lo que se necesitaba o que sus consejos eran poco prácticos ("ayuda estéril", como señaló una mujer campesina). Sin embargo, algunas mujeres atribuyen a los funcionarios de extensión agrícola el mérito de prestar valiosa asistencia.

d) Adopción de decisiones:

Las mujeres participan significativamente en la adopción de decisiones agrícolas. Se toman decisiones independientes respecto de qué cultivos y ganados se producirán, el mejoramiento de las instalaciones agrícolas, las estrategias de comercialización y la contratación de mano de obra. Las decisiones acerca del crédito, la extensión de los terrenos agrícolas y la protección de los cultivos las toman conjuntamente con su pareja. Las decisiones acerca del empleo del dinero obtenido de la venta de sus propios productos son prerrogativa de la mujer. Invariablemente ese dinero se utiliza para el mantenimiento del hogar y para emergencias. Los ahorros acumulados mediante asociaciones no oficiales de crédito rotativo se aplican a la compra de vivienda y muebles.

e) Acceso a la tierra:

Aunque no hay nada en la jurisprudencia del Caribe que excluya a la mujer de la propiedad de la tierra, todavía persiste la modalidad tradicional de propiedad o control de la tierra por parte del hombre. En los casos en que las mujeres logran acceso a la tierra, por lo general ésta es adquirida mediante herencia proveniente de sus padres o esposos. La propiedad mediante compra directa, aunque no es

desconocida, es menos frecuente. El acceso es también posible mediante arrendamiento, alquiler u ocupación ilegal de un sitio, pero todas estas posibilidades crean una considerable inseguridad de la tenencia de la tierra. Especialmente en los territorios más pequeños, el tamaño medio de los predios cultivados por mujeres es inferior a los tres acres, es decir, el extremo inferior de la amplitud mínima de 1 a 5 acres utilizada en las estadísticas oficiales.

f) Problemas:

Los principales problemas identificados por las mujeres agricultoras se centran en el acceso a suministros (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, etc.), el acceso al crédito, el transporte a los mercados y los robos prediales. Para las mujeres en el trabajo agrícola asalariado, la principal necesidad es la adecuada representación de sus intereses por parte de las organizaciones sindicales. Para las mujeres que venden los productos agrícolas, su necesidad es de transporte y arreglos de comercialización.

Los esfuerzos por mejorar la situación de la mujer en la agricultura han fluctuado desde proyectos de desarrollo agrícola en gran escala, algunos de los cuales incluyen un componente orientado hacia la mujer, hasta proyectos comunitarios en pequeña escala que centran su atención en los grupos de mujeres o los grupos cooperativos en que predominan las mujeres. El éxito ha sido variado.

Un ejemplo de un proyecto en gran escala fue el Proyecto Regional de Extensión Agrícola del Caribe (1982-1989), proyecto de siete años de duración financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por 10.4 millones de dólares.⁶ El proyecto estaba destinado a aumentar la eficacia de los sistemas de extensión nacionales y de determinadas instituciones regionales que respaldan y apoyan los servicios nacionales de extensión. La etapa I del proyecto procuraba hacer participar a las mujeres activamente y en forma más plena en las políticas y programas de extensión. Para alcanzar este objetivo el proyecto inició un análisis detallado del papel de la mujer en la agricultura y diseñó un programa de capacitación que tenía en cuenta los aspectos genéricos para llevarlo a la práctica en la etapa II. Sin embargo, en la etapa II las referencias a la mujer fueron reemplazadas por un nuevo enfoque centrado en las "familias agrícolas". Los planes para reunir datos y los procedimientos de supervisión y evaluación para abordar las cuestiones de género fueron eliminados; lo mismo pasó con las propuestas de actividades específicas de la mujer y los programas de capacitación en que se tenía en cuenta el género. Al final del proyecto, era evidente que aunque los planificadores del proyecto y los funcionarios del Ministerio reconocían el papel clave que le cabía a la mujer en el logro de los objetivos del proyecto, no se adoptaron las medidas necesarias para asegurar una adecuada consideración de las diferencias de género. De este modo, el proyecto no logró alcanzar los objetivos que perseguía el mejoramiento de los sistemas de extensión.

Un ejemplo diferente proviene de Trinidad y Tabago, territorio en que, durante los tres últimos años, un grupo de seis mujeres de la aldea de Paramin ha producido y vendido condimentos mixtos embotellados.⁷ Paramin es una aldea situada en las colinas que dominan la ciudad capital, Puerto España, en que todos los residentes son dueños de la tierra y se dedican al cultivo de condimentos. Las seis mujeres buscaban un medio de utilizar sus productos para elaborar un producto de alta calidad y evitar al mismo tiempo las incertidumbres del mercado de alimentos frescos. Una pequeña donación del Fondo del Canadá les permitió cercar parcialmente el área alrededor de la casa de un miembro del grupo para utilizarla como fábrica. La donación también proporcionó algún equipo básico. No se ha procurado conseguir otras donaciones o préstamos de esa misma fuente o de cualquier otra fuente, ya que el grupo "no está interesado".

Con ayuda proveniente de la Red de Desarrollo Rural de Trinidad y Tabago (TTRDN), el grupo pudo recibir dos tipos de asistencia técnica. Se patrocinó el viaje de dos miembros del grupo para que visitaran una cooperativa de mujeres en Granada que también se dedicaba a elaborar y vender hierbas y especias locales. Ello ha dado por resultado un experimento que lleva a cabo actualmente el grupo de Paramin para mejorar la tecnología de secado aprendida en Granada a fin de mejorar la apariencia del producto terminado. Todo el grupo se benefició de un cursillo de capacitación en mantención de registros, preparación de estados de situación financiera, control de calidad y comercialización. La producción actual asciende a un promedio de 50 cajas (24 botellas de 300 ml) cada 15 días, lo que produce un ingreso bruto de 3 000 dólares de Trinidad y Tabago. Una importante cadena de supermercados es su principal distribuidor y cualquier excedente se vende a tiendas pequeñas en la comunidad. El grupo es incapaz de estimar el ingreso neto y no tiene ninguna idea de si éste representa una mejora con respecto a su situación anterior al proyecto en materia de ingresos. Sin embargo, están decididas a seguir adelante con el esfuerzo sin asistencia financiera, ya que "nada va a arredrarlas".

Con estos dos ejemplos se destacan dos aspectos de la transformación productiva que subraya el modelo de la CEPAL. El primero se relaciona con un aspecto específico de intervención, en este caso los programas de extensión, y el segundo tiene que ver con los vínculos existentes entre la agricultura en pequeña escala y la agroindustria. Ambos casos demuestran los peligros latentes de diseñar una política o programa sin hacer referencia a las cuestiones de género: en un caso, se puede llegar a transigir sobre los objetivos del proyecto; en el otro, se puede poner en peligro la cohesión del grupo.

2. Industria manufacturera

Protegido por leyes de incentivo y una gama de mecanismos institucionales de apoyo, este sector se ha orientado tradicionalmente hacia la sustitución de importaciones. Se hace hincapié primordialmente en la industria ligera, pero tres territorios participan en la industria pesada: Guyana y Jamaica en bauxita/alúmina y Trinidad y Tabago en productos derivados del petróleo y acero.

Como en el caso de la agricultura, este sector refleja tres niveles de operación: un nivel artesanal, con sede en el hogar, orientado hacia el mercado nacional; un nivel semicomercial de empresas de tamaño pequeño y mediano que atienden a los mercados nacionales y regionales; y un nivel comercial, de escala mediana a grande, que atiende a los mercados regionales y, en el caso de las compañías de propiedad extranjera, al mercado externo. Sin embargo, estos niveles deben considerarse como tipos "ideales" y no como entidades distintas ya que existe una superposición considerable. En cuanto a la producción, los resultados combinados de estos diversos tipos de operación no fueron especialmente alentadores durante los años ochenta. En general, los niveles de producción cayeron, al igual que el valor real agregado y la contribución al producto interno bruto (véase el cuadro 16).

Dos conjuntos de factores contribuyeron a estas disminuciones. Los factores externos incluyeron la recesión de la economía internacional, que deprimió la demanda de alimentos producidos localmente y aumentó el nivel de proteccionismo; las elevadas tasas de interés; el aumento de los costos de materias primas y equipo; y la menor disponibilidad de inversión extranjera. Los factores endógenos se relacionan principalmente con la continúa debilidad estructural del sector, la disminución en el mercado de la CARICOM y las fluctuaciones de la demanda en el mercado nacional al disminuir el ingreso disponible de los hogares. Estructuralmente, el sector ha sido entorpecido por los elevados costos de producción, una escasez de capacidad empresarial autóctona de alta capacidad, un mercado y fuentes de información

débiles, lentitud de reacción ante los avances tecnológicos e incapacidad para penetrar en los mercados extrarregionales.

Además, por lo menos un comentarista ha mencionado la renuencia de los principales miembros de la elite comercial a aprovechar la oportunidad de la crisis económica para reestructurar sus medios de producción o para estimular la reforma sociopolítica y participar en ella [Thomas, 1989].

Como en el caso del sector agrícola, las mujeres figuran en cada nivel de operación del sector industrial y en todos los subsectores. Los datos de que se dispone sugieren que el éxodo de las mujeres que trabajaban en la agricultura observado en los años setenta ha continuado durante los años ochenta (véase el cuadro 17). Muchas de esas mujeres han sido absorbidas por el sector industrial, que ha aumentado en lo que se refiere tanto al número absoluto de mujeres empleadas y la proporción que constituyen respecto de todos los trabajadores industriales. La mayor parte de este aumento fue absorbido por las fábricas de las zonas francas industriales que proporcionaron empleo para un gran número de mujeres, aun cuando esos números eran bajos en relación con los niveles de la inversión hecha, y las condiciones de empleo planteaban muchas preguntas [CEPAL, 1990a]. Sin embargo, el aumento de la disponibilidad de empleos fabriles se ha traducido en pocos cambios en el transcurso del tiempo en la distribución de las mujeres dentro del sector [Massiah, 1991]. Se concentran en tres subsectores: textiles y vestuario, montaje de artículos electrónicos y fabricación de artículos varios. En materia de ocupación, predominan en las categorías de producción y trabajo de oficina. Por lo que se refiere al ingreso, sus remuneraciones ascienden a la mitad de la de los hombres empleados en el sector. Utilizando las palabras de una comentarista sobre América Latina, la "rigidez ideológica" de la segregación ocupacional ha permanecido sin variaciones durante el decenio [Arriagada, 1991].

En el sector informal se cree que las mujeres se concentran en la costura, las artesanías y la conservación y preparación de alimentos, aunque no disponemos de datos para demostrar cuál es su número. La limitada información con que se cuenta, la cual proviene de proyectos comerciales en pequeña escala que han recibido ayuda para el desarrollo, prestan apoyo a este punto de vista [Massiah, 1988]. Sin embargo, hay que realizar mucho más investigación en esta esfera clave, ya que se está haciendo tanto hincapié en el fomento de las empresas en pequeña y mediana escalas, que es donde primordialmente trabaja un número considerable de mujeres.

Ninguno de los llamamientos a reestructurar la producción (es decir, ni la CEPAL ni la CER) han identificado estas modalidades de empleo entre las deficiencias estructurales del sector manufacturero. Por consiguiente, ninguna de ellas aborda la cuestión del efecto que pueden tener las estrategias propuestas en la reestructuración del equilibrio de oportunidades de empleo e ingresos para hombres y mujeres en el sector.

La asistencia para el desarrollo que se presta a las mujeres dedicadas a la producción ha tendido a transmitirse por intermedio de proyectos. Como en el caso de la agricultura, los proyectos de desarrollo en el sector manufacturero tienden a ser de infraestructura en gran escala o de generación de ingresos en pequeña escala. También como en el caso de la agricultura, existe una tendencia en los proyectos en gran escala a evitar la inclusión en el proyecto de las cuestiones relacionadas con la mujer. Sin embargo, la considerable participación de la mujer en el sector industrial hace que sea un poco más difícil soslayar la cuestión.

Un ejemplo de un proyecto que está logrando algún grado de éxito en sus intentos por abordar la cuestión es el Proyecto de Asistencia a las Pequeñas Empresas, patrocinado por la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (en marcha desde 1986 hasta el presente).⁸ Con un presupuesto de 11.4 millones de dólares, este proyecto está tratando de permitir que las empresas de tamaño pequeño y mediano en los sectores productivos privados de Barbados y el Caribe oriental alcancen un crecimiento autosostenido. El proyecto es ejecutado por la Asociación de Industria y Comercio del Caribe (CAIC). La ayuda adopta la forma de asistencia técnica, capacitación y desarrollo institucional para las empresas pequeñas y medianas; crédito y asesoramiento en administración de empresas al sector de las microempresas. La asistencia a las pequeñas empresas en el país es canalizada por intermedio de una red de ocho fundaciones nacionales de desarrollo en la subregión. Además, la asistencia a las mujeres empresarias en Barbados es canalizada por conducto de Women in Development (WID) Ltd.

Tras cinco años de funcionamiento, el proyecto había contribuido a la creación y expansión de más de 2 500 microempresas, había aumentado la productividad y la producción en 400 empresas de tamaño pequeño y mediano, y había creado o salvado alrededor de 4 000 empleos. La prestación de apoyo a las mujeres empresarias como subsector separado no figuraba entre los objetivos originales del Proyecto de Asistencia a las Pequeñas Empresas. Sin embargo, la realidad del predominio de las mujeres en las microempresas y en las empresas pequeñas y de la percepción de la mujer como un grupo de alto riesgo por parte de las instituciones financieras establecidas movió a que se efectuara una revisión de los objetivos. Se fijó un objetivo general de 35% para las actividades de proyectos dirigidas específicamente a la mujer. A comienzos de 1991, el 40% de los receptores de préstamos, de los dueños de empresas y de los poseedores de empleos y el 60% del personal en adiestramiento eran mujeres. Aproximadamente una tercera parte de ellas ha estado en el sector de la producción. La estrategia de fijar objetivos con respecto a la mujer y la inclusión de un componente WID en un territorio ha contribuido al logro de los objetivos generales del proyecto. Además, ha proporcionado a las mujeres habilidades comerciales más agudas, mayor confianza y la independencia económica que buscan constantemente las mujeres del Caribe.

Otro tipo de ejemplo proviene de Guyana, país en que el Movimiento Socialista Revolucionario de la Mujer inició un pequeño programa de capacitación en 1977 para enseñar a las mujeres a unir telas estampadas y hacer prendas de vestir.⁹ El éxito de este programa inicial estimuló su expansión a 10 centros a través del país y en escuelas secundarias de diversas comunidades, donde finalmente esta asignatura fue incluida en el plan de estudios. Después de un sinnúmero de exposiciones en el país y en el extranjero, se tomó la decisión de establecer, con financiamiento del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), un centro de producción —Vancraft Production Unit— conformado por 20 amas de casa que trabajarían a jornada parcial. Cinco participan en la producción de la tela estampada, cinco en la producción de prendas de vestir y artesanías y 10 en la administración y ventas. La tela que se utiliza es producida por una empresa local, Sanata Textile Mill, que es un proyecto respaldado por el Gobierno de China. Desde 1983 se han abierto dos puestos de ventas donde se comercializan los productos bajo la marca comercial Vancraft Originals. La operación ha tropezado con varios problemas, incluidos el elevado costo de las materias primas, la incapacidad para pagar salarios competitivos, la inexperiencia en materia de contabilidad y mantenimiento general de registros. Sin embargo, las alentadoras señales recientes de recuperación de la economía han creado oportunidades comerciales que Vancraft está tratando de explotar.

Estos dos ejemplos ilustran el hecho de que con una asistencia apropiadamente planificada, las mujeres de la subregión pueden convertirse en empresarias comerciales competentes y lo hacen. Distintos casos del Proyecto de Asistencia a las Pequeñas Empresas sugieren que aunque la empresa permanezca a nivel de microempresa o de pequeña empresa, es posible que las mujeres o los grupos de mujeres se conviertan en importantes fabricantes por derecho propio. El caso Vancraft ilustra la importancia que

tiene vincular los esfuerzos de producción de un grupo de mujeres a un elemento clave en la estrategia general de desarrollo nacional, en este caso una fábrica de tejidos. Este ejemplo ilustra además que no es necesario que la transmisión de los conocimientos especializados en materia de producción se canalice únicamente desde los profesionales hacia los grupos de artesanía. Estos grupos pueden ser utilizados como conductos hacia la escuelas y por lo tanto al sistema de enseñanza académica, otro elemento clave en la estrategia de desarrollo nacional.

3. Servicios

La principal industria de servicios de la región es el turismo, que ha sido una importante fuente de divisas en varios territorios de la CARICOM. Los datos sobre llegadas de turistas, gastos de los turistas y contribución al PIB sugieren que ha habido alguna fluctuación durante el decenio y que se registró un crecimiento positivo hacia finales del mismo. Antigua y Belice han sido los territorios en que el sector del turismo ha crecido más rápidamente. Sin embargo, para la subregión en su totalidad, los ingresos recibidos por concepto del turismo a finales del decenio fueron tres veces el valor de los ingresos recaudados a comienzos de él. La estructura del subsector varía entre la propiedad extranjera y la propiedad local (y dentro de esta última, entre el gobierno y el sector privado). Las limitaciones con que se tropieza en el sector incluyen el elevado contenido importado de los gastos y las insuficientes vinculaciones hacia atrás con el sector manufacturero local y con otras ramas de sector de servicios.

Otro subsector clave es el de "servicios financieros", que ha crecido rápidamente (especialmente en Barbados y Jamaica, que están tratando de convertirse en centros financieros extraterritoriales). Aunque otros subsectores dentro del sector de servicios probable satisfacen la demanda interna, no se han realizado muchos esfuerzos para que se conviertan en fuentes de exportaciones. De este modo, por ejemplo, existe considerable competencia profesional, educacional y financiera en la región, pero sin los necesarios arreglos de apoyo, se presentan pocas oportunidades de exportar esos servicios.

La participación de la mujer en el sector de servicios es considerable, pero se concentra en los niveles de menor categoría del sector, por ejemplo el servicio doméstico, y las ocupaciones con menor remuneración, por ejemplo de oficina. Son muy raros los datos a nivel microeconómico que arrojen luz sobre la posición que ocupa la mujer en el sector de servicios en la región. Existe alguna información sobre la mujer en el servicio doméstico y está empezando a emerger alguna información sobre la mujer en las operaciones de entrada de datos. Sin embargo, prácticamente no hay nada en ninguno de los demás subsectores. El apreciable número de mujeres que participan en el sector de servicios y la importancia cada vez mayor que se está asignando a este sector, no sólo como apoyo para la producción sino también como generador de un producto de exportación, sugieren la necesidad de que se concentren las actividades de investigación en esta materia.

La asistencia de proyectos para las mujeres en este sector se ha concentrado principalmente en la capacitación de pequeños grupos a fin de aumentar la capacidad de los miembros del grupo para conseguir empleo. Las pequeñas donaciones para mejorar o ampliar los programas de capacitación de secretarías son muy populares. Asimismo, existen oportunidades para permitir que grupos pequeños aprovechen sus conocimientos especializados y creen una pequeña empresa. Se dice que están aumentando las donaciones para establecer salones de peluquería y servicios secretariales, servicios que tradicionalmente se han relacionado con la mujer. Sin embargo, la escasez de datos fidedignos refuerza la necesidad de que se realicen investigaciones en esta materia.

4. Transformación productiva

El mayor énfasis del modelo de la CEPAL se pone en la industrialización, que se considera "el eje de la transformación productiva" (p. 14). Entre las propuestas para fortalecer el proceso de industrialización se incluyen el establecimiento de una articulación intersectorial, el fortalecimiento de las actividades de capacitación, la creación de empresas y el desarrollo de una infraestructura tecnológica, de comercialización, de comunicaciones y de financiamiento internacional. Algunas de estas estrategias modificarán significativamente en la subregión del Caribe la modalidad predominante del empleo de la mujer en la producción que se caracteriza por elevados niveles de empleo por otros y bajos niveles de empleo por cuenta propia (véase el cuadro 18). El establecimiento de vínculos intersectoriales puede aumentar el empleo, elevar el ingreso medio e incrementar las oportunidades de capacitación y de ascenso para algunas mujeres. Puede crear incluso oportunidades comerciales viables para otros. Sin embargo, la insistencia en conocimientos especializados de alta tecnología y producción para la exportación significará ciertamente para muchas personas la pérdida del empleo o la clausura de empresas explotadas por sus dueños.

Una mayor capacitación de los empleados puede mejorar los niveles de productividad, pero mucho depende de quién define la productividad y cómo se define. Además, a menos que exista una estrategia para combinar la capacitación con los intentos por ampliar la base de la actividad empresarial, se crearán pocas oportunidades para alcanzar una auténtica autosuficiencia. Las mujeres constituyen un grupo importante en este sentido, ya que han demostrado una especial propensión a establecer los tipos de microempresas que considera el modelo de la CEPAL dentro del sector productivo. Sin embargo, el espíritu empresarial consiste no sólo en estar dispuesto a crear una empresa, sino también en acumular capital, reinvertir y expandirse. Las mujeres en las microempresas de la subregión han mostrado una tendencia a utilizar los ingresos obtenidos de sus empresas para la mantención de sus hogares y sus familias. En los casos en que han estado dispuestas a expandir sus empresas, han mostrado una decidida falta de inclinación a hacerlo más allá del punto en que perciben que están perdiendo el control de los frutos de su trabajo. Por consiguiente, es necesario utilizar la capacitación no sólo como vehículo para transmitir conocimientos técnicos especializados y aumentar la productividad, sino que tiene que utilizarse también como herramienta para promover el cambio social, generar un cambio de actitudes y fomentar la innovación.

El fortalecimiento de la infraestructura puede beneficiar a las mujeres en la medida en que se creen más empleos de servicios a los "productores" y que haya oportunidades para transformar esas habilidades en pequeñas empresas. La mayoría de los servicios previos y posteriores a la producción y los servicios de procesamiento de información identificados por el modelo de la CEPAL se basan en conocimientos especializados que ya posee un gran número de mujeres en el sector de servicios. Las mujeres necesitan asistencia para convertir esos conocimientos en productos comercializables vinculados al sector de la producción. Asimismo necesitan lograr acceso a conocimientos especializados de un nivel superior a fin de hacer subir su participación en el sector de servicios en la escala jerárquica y reducir las desigualdades existentes entre ellas y sus contrapartes masculinos.

Aparte de la reestructuración interna de sistemas y sectores, propuesta por el modelo de la CEPAL, otros dos factores son pertinentes en el Caribe a la formulación de planes para que la transformación productiva tenga lugar de tal manera que beneficie a las mujeres. Se trata de los cambios recientes en la situación económica y política internacional y el papel de los organismos internacionales de desarrollo, ninguno de los cuales es considerado en el modelo de la CEPAL. Con respecto al primer factor, se están produciendo cambios fundamentales en la división internacional del trabajo, las relaciones económicas

internacionales y la importancia geoestratégica de la región. Cada uno de ellos está socavando algunas de las ventajas enumeradas en una sección anterior, limitando potencialmente las oportunidades de introducir cambios efectivos en la estructura de producción e incluir en ella a la mujer. Por ejemplo, los adelantos en materia de tecnología agrícola representan una amenaza para las exportaciones tradicionales y no tradicionales de la región, ya que los productos tropicales pueden producirse actualmente en zonas no tropicales. La aparición de importantes bloques comerciales —por ejemplo, los Estados Unidos de América, Canadá y pronto México, y la Comunidad Económica Europea— pueden amenazar el comercio de exportación de la región. Sin embargo, algunos de estos mismos factores contienen elementos potenciales de intercambio comercial y, por lo tanto, de creación de empleos. Este es otro campo que exige mucha investigación.

La experiencia del Caribe sugiere que los organismos internacionales de desarrollo desempeñan un papel decisivo en cuanto a influir en la dirección del cambio económico. Por ejemplo, fue la apremiante influencia de las Naciones Unidas y de sus organismos la que proporcionó legitimidad a la inclusión de la mujer en el programa de desarrollo. Fue la comunidad donante internacional la que convenció a los organismos regionales y nacionales de desarrollo a hacer lo mismo. Sin embargo, existen variaciones considerables en la forma como son tratadas las preocupaciones de la mujer dentro de los distintos organismos y entre ellos. Esas variaciones se transmiten a los proyectos administrados por esos organismos. La resistencia a integrar las perspectivas de género en los proyectos principales y las preferencias por canalizar los fondos destinados a la mujer por conducto de los proyectos en pequeña escala administrados por las organizaciones no gubernamentales han significado que, en general, no se haya hecho evidente ningún cambio importante en la modalidad de articulación de la mujer dentro del sistema económico. A fin de lograr la transformación productiva económica, se tiene que abordar esta cuestión fundamental, por lo menos en la subregión del Caribe.

De las diversas lecciones que pueden extraerse de los ejemplos de proyectos mencionados en esta sección, cuatro merecen atención especial. En primer lugar está la necesidad de tener presentes las realidades culturales de la participación de la mujer en la producción. Una de esas realidades es el tamaño pequeño de las sociedades, los grupos comunitarios y las empresas comerciales de mujeres del Caribe.¹⁰ Existe una tendencia entre los encargados del desarrollo a considerar que la asistencia en materia de proyectos que buscan, y que obtienen, las mujeres es demasiado pequeña para generar cualquier efecto de desarrollo duradero, ya sea en el proyecto o en la economía general. Sin embargo, en el contexto de los grupos pequeños, tal vez ese éxito sea determinado no por el tamaño del proyecto sino por su manejabilidad y la medida en que ofrece a la mujer una fuente confiable de ingreso y cierta independencia económica. Las iniciativas de desarrollo que al parecer están llevando a las empresarias más allá de su propia percepción de lo que es manejable pueden perfectamente ser contraproducentes.

En segundo lugar, los organismos de desarrollo nacionales fuera del gobierno son capaces de proporcionar a los grupos pequeños acceso a los conocimientos técnicos, la asistencia financiera y el apoyo en infraestructura. Estos organismos —llamados organizaciones no gubernamentales— pueden ser eficaces porque tienen la flexibilidad, el entusiasmo y la compasión de las que a menudo carecen tanto el gobierno como los organismos donantes internacionales. Cualquier propuesta para la transformación productiva deberá incluir a las organizaciones no gubernamentales entre los actores sociales.

En tercer lugar, los planes de programas y proyectos diseñados para mejorar la situación de la mujer en la producción deberán ser vastamente publicitados y debatidos, no solamente por los grupos directamente interesados sino también por el público en general. Las organizaciones no gubernamentales de mujeres y las oficinas gubernamentales para asuntos de mujeres tienen un papel decisivo que desempeñar en este punto.

Finalmente, las ventajas de trabajar por conducto de una red regional son evidentes, como lo prueba la experiencia del Proyecto de Asistencia a las Pequeñas Empresas. La consideración de esta experiencia y otras similares es indispensable para el futuro de la región.

IV. MIRANDO HACIA EL FUTURO

"Un enfoque del desarrollo que tenga en cuenta los aspectos genéricos no es sólo un imperativo político, sino también una condición fundamental para un progreso económico y social sostenido."

Comisión del Sur, p. 140

A pesar de sus perspectivas diferentes, los modelos de la CEPAL y de la CER proponen estrategias notablemente similares. El modelo de la CEPAL busca la transformación de las estructuras y procesos productivos de tal manera que se asegure una mayor equidad social. El modelo de la CER busca un marco para un modelo de desarrollo sustentable en que estén integradas las consideraciones humanas, sociales, económicas y ambientales. Cada modelo ha producido un conjunto de medidas en que se otorga elevada prioridad a las estrategias de desarrollo orientadas hacia afuera estimuladas por el sector privado, el desarrollo de los recursos humanos, la preservación y acrecentamiento de los procesos democráticos y la profundización de la cooperación regional. Si bien los problemas a los que tienen que hacer frente estas estrategias pueden estar presentándose en forma más dramática que antes, las estrategias mismas Año son del todo nuevas. Lo que podría ser nuevo es el equilibrio logrado entre ellas, porque eso reflejará si se han aprendido o no las lecciones del pasado.

Una lección que al parecer no se ha aprendido es la necesidad de incorporar una dimensión de género en las prescripciones de políticas. Al no considerar la más fundamental de todas las injusticias, la desigualdad basada en el género, en las estrategias que proponen, tanto el modelo de la CEPAL como el de la CER están en peligro de perpetuar las desigualdades de género existentes y apartarse aún más del logro del objetivo general de la equidad social.

La intensa participación de las mujeres en cada sector y en cada nivel de la actividad social y económica de la subregión apunta hacia la necesidad de cerciorarse de que todo cambio de política propuesto se base en esa dinámica. Se puede lograr que las cuatro principales líneas de políticas beneficien a las mujeres si se hacen esfuerzos especiales para considerar a ciertos grupos de mujeres; si la información acerca de la mujer se hace fácilmente disponible; si en los arreglos institucionales se tienen en cuenta las cuestiones relacionadas con la mujer; y si se dirigen programas y proyectos específicos hacia los grupos de población en que se sabe que predominan las mujeres. A continuación se presentan indicaciones de los tipos de medidas que pueden ser viables dentro de cada una de las principales líneas de políticas.

1. Estrategias de desarrollo orientadas hacia afuera

Todas las publicaciones surgidas de los análisis de las experiencias económicas de la subregión durante los años ochenta condenan la capacidad de esta estrategia para efectuar cualquier cambio sustancial en la asignación de recursos y el cercenamiento de la función del gobierno en lo que se refiere a guiar la producción y distribución de los bienes y servicios en las economías nacionales. La idea de constituir un grupo amplio de actores sociales para examinar estas cuestiones y ayudar en la orientación de la política de desarrollo puede tener dos consecuencias: por una parte, los actores sociales pueden constituir una fuente para el estímulo de la producción; por otra parte, pueden constituir un mecanismo al que se le puede atribuir la responsabilidad de la entrega y mantenimiento de servicios sociales básicos. En cualquiera de los dos casos, las posibilidades de aumentar las oportunidades de producción y de empleo para la mujer pueden ser acumuladas por grupos vigilantes de mujeres que hayan sido incluidas como actores sociales. Entre las medidas que deberían adoptarse se puede incluir el cabildeo para cerciorarse de que:

- la transformación productiva haga hincapié en la mantención de condiciones de trabajo de alto nivel (para las mujeres, entre estas condiciones deberían incluirse la prestación en el lugar de trabajo de servicios de salud y de cuidado de los niños en los parques industriales, protección de los derechos de los trabajadores, especialmente en los casos en que no haya organizaciones sindicales, y el cumplimiento de las normas ambientales apropiadas);
- las propuestas que tengan por finalidad mejorar las perspectivas de exportación no socaven los avances en materia de empleo logrados anteriormente por las mujeres;
- los pequeños empresarios tengan acceso adecuado a las tierras, el crédito y la tecnología;
- no se apliquen los despidos en forma desproporcionada a las mujeres (los gobiernos deberían dar el ejemplo en este punto e insistir en que el sector privado siga su ejemplo);
- se establezcan vínculos verticales y horizontales entre los grandes y los pequeños productores, a fin de vincular a estos últimos de manera más firme en los sectores dinámicos de la economía;
- todos los actores sociales busquen nuevas formas de colaborar en el ahorro y la inversión a fin de atraer divisas;
- se estimule a las mujeres y se les proporcione el apoyo necesario que les permita participar en campos tecnológicos no tradicionales de la producción;
- se introduzcan horas de trabajo flexibles para todos los trabajadores que les permitan realizar sin problemas los quehaceres domésticos; y

- se exponga repetidamente a los actores sociales a las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer", que presentan un conjunto de medidas centradas en el mejoramiento de la posición de la mujer en el mercado de trabajo mediante la eliminación de los motivos de discriminación y el aumento de las oportunidades de empleo. Muchos gobiernos de la subregión han adoptado estas estrategias y se les debería recordar esta situación en repetidas oportunidades.

2. Desarrollo de los recursos humanos

Aunque se dispone de programas de enseñanza académica y de capacitación informal para hombres y para mujeres, es evidente que las mujeres de la subregión no están participando todavía en números suficientemente grandes en los tipos de programas de capacitación que pueden acrecentar significativamente el proceso de producción. Tanto el modelo de la CEPAL como el de la CER reconocen la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza básica, ampliar la enseñanza secundaria y terciaria y proporcionar capacitación profesional para los desempleados, los trabajadores empleados y las personas que tratan de reingresar en el mercado del trabajo. Además, el modelo de la CER busca medidas para asegurar que se comparta la responsabilidad de la reproducción social, se dé más importancia al papel de la juventud, se reduzca la migración, se conciben políticas de población y se mantenga la infraestructura social.

Las mujeres pueden beneficiarse de todas estas iniciativas, pero lo pueden hacer en mayor medida si se dirigen hacia ellas esfuerzos específicos. Entre las medidas que se pueden considerar figuran las siguientes:

- aumentar el número de niñas a las que se imparta capacitación en ciencia, tecnología y administración a fin de proporcionarles acceso a empleos altamente calificados;
- tal vez sea necesario evaluar y revisar los programas de capacitación existentes a fin de aumentar la participación de las mujeres entre quienes reciben capacitación y alentar a las niñas a capacitarse en materias no tradicionales. Estas medidas deben ser complementadas con becas y oportunidades de aprendizaje y empleo ofrecidas por el sector privado;
- se deben establecer mayores vínculos entre las instituciones terciarias que proporcionan capacitación profesional y los organismos que introducen cambios en los procesos de producción, a fin de asegurar la pertinencia de la capacitación que se imparta;
- es necesario que el ofrecimiento directo de capacitación en ciertas técnicas sea complementado por programas de educación pública que traten de promover la comprensión por parte del público de las consecuencias de los cambios probables en la producción y la economía;
- la capacitación de los actuales y potenciales empresarios pequeños y medianos, entre los cuales predominan las mujeres, debería vincularse a la provisión de capital para el establecimiento de empresas;

- se necesita urgentemente efectuar investigaciones sobre los vínculos entre la salud de la mujer y la actividad económica.

3. Preservación e intensificación de los procesos democráticos

El principal elemento en este conjunto de estrategias radica en la idea de que los actores sociales colaboren en la formulación y puesta en práctica de las políticas. Es fundamental para esta colaboración la disponibilidad de datos oportunos y confiables y la existencia de eficaces mecanismos de facilitación.

Con respecto a las mujeres de la subregión, aunque se dispone de alguna información, es necesario realizar esfuerzos mucho mayores para reunir y difundir información. Entre esos esfuerzos se pueden incluir los siguientes:

- el establecimiento de una base regional computarizada de datos estadísticos sobre la mujer;
- el análisis y la documentación de los resultados de los esfuerzos para incluir a la mujer y las cuestiones relativas a la mujer en los planes y procesos de desarrollo;
- la realización de investigaciones, con la consiguiente difusión de los resultados, sobre
 - la salud de la mujer y la crisis económica;
 - la mujer en el sector de servicios;
 - la mujer en el sector informal;
 - las repercusiones del cambiante sistema económico internacional sobre la mujer;
 - el efecto de los proyectos de desarrollo sobre la mujer de la subregión.

Si en realidad la entrega de equidad social se efectúa por intermedio de los tres mecanismos institucionales, el sistema jurídico, el mercado y el Estado, éstos deben ser equipados para reconocer la desigualdad de género y hacerle frente. Para ello se requiere:

- capacitación de los planificadores del sector público y de los oficiales de proyectos del sector privado en análisis de género y planificación que tenga en cuenta el género. Esto debería aplicarse también a los administradores de todas las organizaciones incluidas entre los actores sociales;
- establecimiento de un mecanismo que asegure la vinculación directa entre las oficinas de asuntos de la mujer y los ministerios de hacienda y planificación;
- mejoramiento de las oficinas de la mujer existentes;

- asistencia a las organizaciones no gubernamentales para permitirles que funcionen como actores sociales eficaces.

4. Cooperación regional

Esta estrategia, tal vez más que las otras, ha sido objeto de mucha retórica no acompañada por adelantos significativos en el grado de cooperación. Tanto el modelo de la CEPAL, desde su perspectiva latinoamericana, como el modelo de la CER, desde su perspectiva de los países del Caribe miembros del Commonwealth, sostienen que se necesita menos conversación y más acción. Los dos modelos consideran necesario fortalecer las instituciones de integración, consolidar el apoyo político para el proceso y abarcar un número mayor de territorios.

Con respecto a la mujer, estas directrices generales deben ser complementadas por:

- la consolidación de la colaboración entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales a nivel nacional y regional;
- elaboración por parte de las organizaciones no gubernamentales de una estrategia regional de mediano a largo plazo para la mujer en la que se podrían incluir algunos arreglos de empresas mixtas cuidadosamente seleccionadas;
- mayor participación de la mujer en la identificación, planificación y ejecución de programas regionales, por ejemplo, el Plan Regional de Alimentos;
- aprovechar la iniciativa de promover y llevar a la práctica la enseñanza de un segundo idioma, primero entre los encargados de las actividades en pro del desarrollo y haciéndola extensiva luego al sistema educacional;
- intercambio regional de capacitación y conocimientos técnicos especializados a diferentes niveles;
- establecimiento de centros de coordinación de los asuntos relativos a la mujer en las instituciones regionales que todavía no los tengan; y
- fortalecimiento de la Oficina de Asuntos de la Mujer en la Secretaría de la CARICOM.

CONCLUSIONES

Estas sugerencias se aplican simultáneamente a los distintos territorios y a la región en su totalidad. Sin embargo, su factibilidad depende del entorno económico internacional, en particular la buena disposición para cambiar las políticas y prácticas convencionales. Una consideración crítica en este punto es la cuestión de la disponibilidad continua de ayuda financiera.

Gran parte de los progresos realizados en la subregión se pueden atribuir directamente a la ayuda extranjera que se ha utilizado para mejorar los servicios sociales y la infraestructura física, así como para estimular la producción. El problema actual radica en la incapacidad de la subregión para atraer más ayuda debido a las dificultades que ha tenido para efectuar el servicio de deudas pasadas. Debido a que gran parte de su deuda es deuda externa, la subregión se ha convertido actualmente en exportadora neta de divisas, precisamente en el momento en que más las necesita. Entre las numerosas propuestas para contrarrestar este problema, una digna de considerarse es un intercambio de deuda por un arreglo de equidad de género. Ello podría liberar nuevo financiamiento que podría utilizarse para restablecer el antiguo dinamismo y crear un clima favorable para cambiar la producción y aumentar las oportunidades de empleo para las mujeres. Esto último es vital si se desea consolidar y seguir adelante con los progresos realizados por la mujer en la subregión en el pasado en vez de socavarlos y retroceder.

Notas

¹ Las organizaciones no gubernamentales que asistieron a la conferencia estaban descontentas con el proceso de celebración de consultas como se dejó ver en los preparativos de la conferencia, en la representación mínima de las preocupaciones de las organizaciones no gubernamentales en el documento de antecedentes y en la falta de "interés real en celebrar consultas y llegar a un consenso en la formulación de políticas y no se identifican mecanismos para canalizar la labor de los actores sociales" (Stuart, T. y D. Pantin, 1991, p. 6 y 7).

² Para ilustraciones de los posibles usos de las estadísticas disponibles, véase Massiah (1990a).

³ Esta sección se basa en gran medida en Forde (1989).

⁴ Esta sección se basa en gran medida en Massiah (1990b).

⁵ Esta lista se ha preparado con información proveniente de varias fuentes, especialmente Persaud (1989), Nicholls (1990) y Demas (1991).

⁶ A partir de información contenida en Massiah (1988).

⁷ Recopilación de la información suministrada por la Red de Desarrollo Rural Integrado del Caribe (CNIRD).

⁸ Recopilación de la información que figura en Massiah (1988) y de la información suministrada por el Proyecto de Asistencia a las Pequeñas Empresas.

⁹ Recopilación de la información suministrada por la Secretaría de la CARICOM.

¹⁰ Para otros ejemplos, véase Massiah (1989).

BIBLIOGRAFIA

- Aguiar, Neuma y Thais Corral (comps.) (1991), Alternatives: The Food, Energy, and Debt Crises in Relation to Women, Rio de Janeiro, Mujeres por un Desarrollo Alternativo (DAWN/MUDAR), Instituto Universitario de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ), vol. 1.
- Anderson, Patricia (1990), "The demographic basis of social instability in the Caribbean of the 1980s", Peace, Development and Security in the Caribbean, A. Bryan, J.E. Greene y J.M. Shaw (comps.), Londres, McMillan.
- Anderson, Patricia y M. Witter (1991), "The Distribution of the Social Cost of Jamaica's Structural Adjustment 1977-1989", documento preparado para el proyecto de investigación sobre el efecto del ajuste estructural en la deuda social de Jamaica, patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto de Planificación de Jamaica, mayo.
- Antoine, Rose Marie (1990), "Woman: the Victim of Production", documento presentado al seminario "Engender in Justice: Gender and the Rule of Law in the Commonwealth Caribbean", Estudios sobre la Mujer y el Desarrollo/Facultad de Derecho de la Universidad de las Indias Occidentales, Barbados, 3 al 6 de diciembre.
- Antrobus, Peggy (1988), "The Situation of Women in the Caribbean: An Overview Including the Impact of Structural Adjustment Policies on Women", documento preparado para el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), noviembre, inédito.
- Arriagada, Irma (1991), "Latin American women and the crisis: the impact on the work market", Alternatives: The Food, Energy and Debt Crises in Relation to Women, Neuma Aguiar y Thais Corral (comps.), Rio de Janeiro, Mujeres por un Desarrollo Alternativo (DAWN/MUDAR), Instituto Universitario de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ), vol. 1.
- Banco Mundial (1990), World Tables 1989-1990, Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins University Press.
- _____, Informe sobre el desarrollo mundial, Washington, D.C., varios años (1980, 1986, 1987, 1990).
- BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1990), Progreso económico y social en América Latina - Informe 1990, Washington, D.C.
- Bonilla, Ellsy (1990), "Working women in Latin America", Economic and Social Progress in Latin America, IDB 1990 Report, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington, D.C.
- Bourne, C. (1988), "Caribbean Development to the Year 2000: Challenges, Prospects and Policies", informe preparado para la Secretaría del Commonwealth/Secretaría de la CARICOM, mayo, inédito.
- Boyd, Derick (1987), "Efectos de las políticas de ajuste sobre los grupos vulnerables: el caso de Jamaica, 1973-1975", Ajuste con rostro humano: estudio de países, G. Cornia y otros (comps.), Barcelona, Siglo Veintiuno Editores, vol. 2.
- Buvinić, Mayra (1983), "Women's issues in Third World poverty: a policy analysis", Women & Poverty in the Third World, M. Buvinić y otros (comps.), Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

- _____ (1986), "Projects for women in the Third World: explaining their misbehaviour", World Development, vol. 14, N° 5, Oxford Pergamon Press, mayo.
- _____ (1990), "Women and Poverty in Latin America and the Caribbean: A Primer for Policy Makers", informe preparado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington, D.C., Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer, inédito.
- Buvinić, M. y Margaret Lycette (1988), "Women, poverty and development in the Third World", Strengthening the Poor: What Have We Learned?, J.P. Lewis (comp.), Nueva Jersey, Transaction Books.
- CARICOM (Comunidad del Caribe), Conferencia Económica Regional del Caribe (1990), "Guidelines for Economic Development Strategy for CARICOM countries into the 21st Century", preparado por Bourne Compton con la colaboración del Coordinating Working Document and Planning Committee, septiembre, inédito.
- _____ (1991), "Port of Spain Consensus. Securing Caribbean Development to the Year 2000 and Beyond", CARICOM Perspective, N° 50/51, Georgetown, enero-junio.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (1988a), Las mujeres en América Latina y el Caribe: entre los cambios y la crisis (LC/L.464(CRM.4/2)), documento presentado a la Cuarta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Guatemala, 27 al 30 de septiembre de 1988), Santiago de Chile.
- _____ (1988b), Informe de la Cuarta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Guatemala, 27 al 30 de septiembre de 1988) (LC/G.1539(CRM.4/13)), Santiago de Chile.
- _____ (1989), Hacia un desarrollo sostenido en América Latina y el Caribe: restricciones y requisitos (LC/G.1540-P), Cuadernos de la CEPAL, N° 61, Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.89.II.G.3.
- _____ (1990a), Las zonas francas industriales y la mujer en el Caribe (LC/L.586(MDM.11/5)), Santiago de Chile, documento presentado a la Undécima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Varadero, Cuba, 19 al 20 de noviembre de 1990), Santiago de Chile.
- _____ (1990b), Selected Statistical Indicators of Caribbean Countries (LC/CAR/G.324), vol. 3, Puerto España.
- _____ (1990c), Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa (LC/G.1601-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.90.II.G.6.
- Comisión del Sur (1990), Desafío para el Sur, México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
- Comisión Independiente de las Indias Occidentales (1991), "Towards a Vision of the Future - Progress Report on the Work of the Independent West Indian Commission", Barbados.
- Cornia, G. y otros (comps.) (1987), Ajuste con rostro humano: protección de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento, vol. 1; Ajuste con rostro humano: estudio de países, vol. 2, Barcelona, Siglo Veintiuno Editores.
- de Barbieri, Teresita y Orlandina de Oliveira (1991), "The presence of women in Latin America in a decade of crisis", Alternatives: The Food, Energy, and Debt Crises in Relation to Women, Neuma Aguiar y Thais Corral (comps.), Rio de Janeiro, Mujeres por un Desarrollo Alternativo (DAWN/MUDAR), Instituto Universitario de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ), vol. 1.
- Demas, William (1991), "Towards West Indian survival", Occasional Paper, N° 1, Barbados, Comisión Independiente de las Indias Occidentales.

- Elson, Diane (1987), "The Impact of Structural Adjustment on Women: Concepts and Issues", documento preparado para la Segunda Reunión de los Ministros del Commonwealth encargados de los asuntos de la mujer, Harare.
- _____ (1991), "Gender and Adjustment in the 1990s: An Update on Evidence and Strategies", documento preparado para la Reunión Interregional de la Secretaría del Commonwealth sobre las Dificultades Económicas, el Ajuste Estructural y la Mujer, Londres.
- Forde, Norma (1989), "Aspects of Law Relating to the Status of Women in the Caribbean with Partial Reference to Selected CDCC Countries", documento preparado para el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), marzo, inédito.
- Ghai, D. y Cynthia Hewitt de Alcántara (1989), The Crisis of the 1980s in Africa, Latin America and the Caribbean: Economic Impact, Social Change and Political Implications, Discussion Paper, N° 7, Ginebra, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD).
- Hart, K. (comp.) (1989), Women and the Sexual Division of Labour in the Caribbean, Kingston, Jamaica, Universidad de las Indias Occidentales, Consortium Graduate School of the Social Sciences.
- Jaquette, Jane (1990), "Gender and justice in economic development", Persistent Inequalities - Women and World Development, Irene Tinker (comp.), Oxford, Oxford University Press.
- Joekes, Susan (1987), Women in the World Economy, Oxford, Oxford University Press.
- Leslie, Joanne y otros (1988), "Weathering economic crises: the crucial role of women in health", Health, Nutrition and Economic Crises: Approaches to Policy in the Third World, D. Bell y M.R. Reich (comps.), Boston, Auburn House Publishing Co.
- Massiah, Joycelin (1988), "RDO/C Aid to Women in the Caribbean", informe preparado para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Bridgetown, Barbados, julio.
- _____ (1989), "Women's lives and livelihoods: a view from the Commonwealth Caribbean", World Development, vol. 17, N° 2, Oxford, Pergamon Press.
- _____ (1990a), "Making the Invisible Visible: Indicators for Planning for Women in Caribbean Development", informe preparado para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Cave Hill, Barbados, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de las Indias Occidentales, marzo, inédito.
- _____ (1990b), "Economic Change, Structural Adjustment and Women in the Caribbean", informe preparado para la Reunión Regional de la Secretaría del Commonwealth sobre "el ajuste estructural, el cambio económico y la mujer", Barbados, mayo.
- _____ (1991), Weathering Economic Crises: Economic Recession and Barbadian Women in Manufacturing, 1970-1989, Cave Hill, Barbados, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de las Indias Occidentales.
- Moser, Caroline (1989), "Gender planning in the Third World: meeting practical and strategic gender needs", World Development, vol. 17, N° 11, Oxford, Pergamon Press.
- Naciones Unidas (1991), The World's Women 1970-1990: Trends and Statistics (ST/ESA/STAT/SER.K/8), Social Statistics and Indicators, serie K, N° 8, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales (DAESI), Oficina de Estadística de las Naciones Unidas (UNSO), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.90.XVII.3.
- Neil, Joan (1990), "Adjustment, Transition, Transformation and the Social Sector: A Framework for Continuing Analysis and Policy Reformulation", documento preparado para el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), noviembre, inédito.
- Nicholls, Neville (1990), "Some Lessons from the Nineteen-Eighties", discurso del Presidente del Banco de Desarrollo del Caribe en la Vigésima Reunión Anual de la Junta de Gobernadores, Paradise Island, Bahamas, 17 y 18 de mayo de 1990.

- Pastor, Robert y R. Fletcher (1991), "The Caribbean in the 21st century", Foreign Affairs, vol. 70, N° 3, Nueva York, Council on Foreign Relations, Inc.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (1990), Desarrollo humano: Informe 1990, Bogotá, Tercer Mundo Editores.
- _____ (1991), Desarrollo humano: Informe 1991, Bogotá, Tercer Mundo Editores.
- Secretaría del Commonwealth (1989), Engendering Adjustment for the 1990s: Report of a Commonwealth Expert Group on Women and Structural Adjustment, Londres.
- Sen, Gita y Caren Grown (1988), Desarrollo, crisis y enfoques alternativos: perspectivas de la mujer en el Tercer Mundo, México, D.F., El Colegio de México, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, Proyecto Mujeres por un Desarrollo Alternativo (DAWN/MUDAR).
- Standing, G. (1989), "Global feminization through flexible labour", World Development, vol. 17, N° 7, Oxford, Pergamon Press.
- Stuart, Taimoon y D. Pantin (1991), "The Working Document: A Detailed Scrutiny in the Context of the NGOs Vision of a Better Caribbean", documento presentado a la Conferencia Económica Regional del Caribe, Puerto España, Trinidad y Tabago, 27 de febrero al 1° de marzo de 1991.
- Thomas, C.Y. (1989), "The Economic Crisis and the Commonwealth Caribbean: Impact and Response", documento presentado a la Conferencia del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (ISER) del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) sobre "La crisis económica y las repercusiones y reacciones en los países del Tercer Mundo", Kingston, Jamaica, 3 al 6 de abril de 1989.
- Tinker, Irene (1990), "The making of a field: advocates, practitioners and scholars", Persistent Inequalities - Women and World Development, I. Tinker (comp.), Oxford, Oxford University Press.
- Worrell, D. (1987), Small Island Economies: Structure and Performance in the English-Speaking Caribbean Since 1970, Nueva York, Praeger.
- Worrell, D. y C. Bourne (1989), Economic Adjustment Policies for Small Nations: Theory and Experience in the English-Speaking Caribbean, Nueva York, Praeger.

CUADROS

Cuadro 1
**INDICADORES SELECCIONADOS DE LA SITUACION DE LA MUJER EN LOS
 PAISES DEL CARIBE MIEMBROS DEL COMMONWEALTH, 1980**

Territorio	Población total	Hogares			Salud ^a		Fecundidad			Educación		
		Propor- ción de mujeres	Mujeres por 100 hombres	Propor- ción jefatura feme- nina	Esperanza de vida		Tasas de mor- talidad infantil	Morta- lidad ma- terna ^b	Rela- ción niño/ mujer ^c	% de adultos con educación secundaria		Mujeres por 100 hombres con edu- cación se- cundaria
					Hombres	Mujeres				Hombres	Mujeres	
CARICOM												
Antigua	64 800 ^d	52.8 ^d	112 ^d	31.0
Bahamas	209 500	51.4	106	20.3	62	2.6	34.6	35.1	111
Barbados	244 200	52.6	111	43.9	70.0	75.4	14.0	70	1.7	41.9	40.7	113
Belice	142 800	49.7	99	22.4	26.3	..	2.7	13.7	14.8	106
Dominica	73 800	50.2	101	37.7	— 71 —	—	21.6	..	2.3	12.5	14.5	119
Granada	89 100	51.8	99	45.2	— 65.6 —	—	13.8	..	2.2	12.2	14.6	136
Guyana	758 600	50.5	102	24.4	65.8	70.8	36.0	153	2.3	23.5	21.8	97
Jamaica	2 190 400	50.9	104	38.1	70.3	75.7	21.0	106	..	17.7	19.9	121
Montserrat	11 500	51.9	108	42.1	40.2	..	1.9	12.8	14.9	128
Saint Kitts y Nevis	43 300	51.9	108	45.6	— 65 —	—	41.2	..	2.2	22.1	23.7	124
Santa Lucía	113 400	51.9	107	38.8	67.2	75.3	17.2	..	2.4	11.1	14.3	148
San Vicente y las Granadinas	97 800	51.6	106	42.4	26.5	..	2.5	11.5	14.2	139
Trinidad y Tabago	1 055 800	50.2	101	25.3	66.2	71.3	24.0	79	..	39.0	41.7	109
Otros												
Islas Vírgenes Británicas	11 000	48.9	96	25.4	45.1	29.4	36.3	114
Islas Turcas y Caicos	7 400	51.7	107	32.4	15.2	..	2.5	22.4	26.4	132

Fuente: Censos de Población de 1980, diversos territorios.

OPS, 1984, Naciones Unidas, 1990.

^a Ultimo año con datos disponibles entre 1979 y 1985.

^b Fallecimientos de madres por 100 000 nacidos vivos.

^c Hijos por mujer de 14 a 44

años de edad (14 y más para Bahamas).

^d Antigua = 1970.

Cuadro 2

INDICADORES DE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA, 1980

Territorio	Tasas de participación de trabajadores		Mujeres por cada 100 hombres	Tasas de desempleo		Mujeres desempleadas por cada 100 hombres desempleados
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	
CARICOM						
Antigua
Bahamas	70.1	48.1	75	10.4	16.3	125
Barbados	74.4	47.6	74	6.7	14.1	169
Belice	56.8	21.4	25	4.5	4.4	24
Dominica	68.3	32.4	49	16.9	23.6	74
Granada	69.7	36.9	60	16.3	21.2	83
Guyana	72.3	20.3	29	15.1	22.1	47
Jamaica	42.0	22.7	58	35.7	34.9	87
Montserrat	72.7	42.1	64	7.5	14.9	138
Saint Kitts y Nevis	76.4	43.2	66	10.4	15.3	102
Santa Lucía	71.7	36.5	59	16.1	22.8	90
San Vicente y las Granadinas	69.0	32.0	53	18.0	22.3	69
Trinidad y Tabago	69.3	26.6	39	11.9	14.7	50
OTROS						
Islas Vírgenes Británicas	84.0	55.4	61	3.4	6.2	113
Islas Turcas y Caicos	82.0	49.6	67	9.0	17.9	150

Fuente: Informes de los censos de población, 1980.

Nota: .. Datos no disponibles.

Cuadro 3

ASPECTOS SELECCIONADOS DE LA CONDICION JURIDICA DE LA MUJER EN EL CARIBE

Territorio	Antigua	Baha- mas	Barba- dos	Belice	Domi- nica	Granada	Guyana	Jamaica	Mont- serrat	Saint Kitts y Nevis	Santa Lucía	San Vicente y las Grana- dinas	Trini- dad y Taba- go
Convención de las Naciones Unidas ^a													
Firmada ^b						x							
Ratificada ^b	x		x	x	x		x	x		x	x	x	x
Constitución													
Igualdad y libertad para todos	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Protección contra la discriminación basada en el sexo				x	x	x	x				x	x	x
Familia													
Ambos cónyuges responsables del mantenimiento de los hijos			x		x	x						x	x
Disolución del matrimonio únicamente por ruptura irreparable			x ⁱ		x	x				x			x
Herencia ^c			x	x									x
Reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio ^d				x	x		x	x		x		x	x
Reconocimiento de reuniones consensuales ^e			x										x
Empleo													
Igual remuneración por trabajo igual	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Seguridad y salud ocupacional		x	x		x								
Licencia de maternidad ^f		x	x		x		x						
Empleados domésticos			x ^j									x	
Derecho penal													
Violación ^g													x
Legalización del aborto			x										
Violencia en el hogar												x	
Ciudadanía ^h													
Por descendencia					x		x				x	x	
Por inscripción					x		x				x	x	

Fuente: Norma Forde, "Aspects of Law Relating to the Status of Women in the Caribbean with Partial Reference to Selected CDCC Countries", documento preparado para el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), marzo, 1989, inédito.

Naciones Unidas, *The World's Women 1970-1990: Trends and Statistics* (ST/ESA/STAT/SER.K/8), Social Statistics and Indicators, Serie K, N° 8, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales (DAESI), Oficina de Estadística de las Naciones Unidas (UNSO), Nueva York, 1990. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.90.XVII.3.

^a Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ^b En diciembre de 1990. ^c Para asegurar los derechos del cónyuge de hecho; cónyuge anterior no vuelto a casar; hijos concebidos fuera y dentro del matrimonio; y familiares a cargo. ^d Siempre que la paternidad se haya establecido en las condiciones legalmente estipuladas. ^e En condiciones de cohabitación continua durante cinco o más años. ^f Todos los territorios tienen sistema de aportaciones para la seguridad social con beneficios de maternidad. ^g Los casos son tratados "a puertas cerradas". ^h Por intermedio tanto del hombre como de la mujer. ⁱ Probado por 12 meses de separación. En todos los demás territorios, de 2 a 5 años. ^j Regula las horas de trabajo y el salario mínimo.

Cuadro 4

CAMBIO ANUAL (%) EN EL PIB POR HABITANTE, 1981-1989^a

Territorio	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987 ^b	1988	1989	1981-1989
Antigua	3.5	-0.8	4.1	6.2	6.4	7.1	7.4	6.3
Bahamas	-10.6	6.2	1.5	5.1	3.5	-0.2	3.3	2.8
Barbados	-2.3	-5.2	0.0	3.2	0.6	4.7	2.4	2.6	2.2	8.1
Belize	0.8	-2.6	-3.9	0.9	-0.1	0.2	11.3	5.5
Dominica	5.0	2.5	0.7	5.4	0.3	5.6	5.4	4.3
Granada	0.9	5.4	0.2	3.9	4.3	4.5	3.9	3.2
Guyana	-2.6	-12.6	-11.7	0.3	-0.8	-1.6	-1.1	-4.6	-3.6	-33.1
Jamaica	1.2	-1.5	0.4	-2.2	-6.9	1.0	4.1	-1.0	-0.5	-5.8
Saint Kitts y Nevis	5.2	6.1	-1.1	6.6	5.7	4.1	4.4	4.9
Santa Lucía	-0.5	1.3	2.3	3.4	4.3	4.2	1.4	3.4
San Vicente y las Granadinas	6.9	3.3	4.8	4.2	3.7	6.2	4.8	6.4
Trinidad y Tabago	-1.8	-1.2	-15.0	-4.9	-4.5	-4.3	-8.3	-4.9	-5.3	-40.8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Las zonas francas industriales y la mujer en el Caribe (LC/L.586(MDM.11/5)), Santiago de Chile, documento presentado a la Undécima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Varadero, Cuba, 19 al 20 de noviembre de 1990), Santiago de Chile, 1990.

Nota: ^a Sobre la base de las cifras en dólares a precios constantes de mercado de 1980.

^b Cifras preliminares.

.. Datos no disponibles.

Cuadro 5

TASAS DE INFLACION ANUAL, 1980-1989

Territorio	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989*
Antigua	19.6	11.5	4.2	2.3	3.9	1.0
Bahamas	12.1	11.1	6.0	4.1	3.9	4.6	5.4	6.0	4.2	5.4
Barbados	14.4	14.6	10.3	5.3	4.6	3.9	1.3	3.4	4.8	6.2
Belice	11.2	6.8	5.0	3.7	3.7	1.0	2.3	2.0	3.3	2.1
Dominica	32.7	13.3	4.5	4.0	2.2	2.1	3.0	4.8
Granada	18.8	7.8	6.1	5.6	2.5	0.5	0.9
Guyana	14.1	24.7	20.3	13.3	25.2	15.0	7.8	28.7	40.0	80.0
Jamaica	26.9	12.8	6.5	16.7	27.8	25.7	15.1	6.7	8.5	14.2
Montserrat	17.8	7.1	8.4	7.0	6.1	3.2	0.2
Saint Kitts y Nevis	10.5	6.0	2.2	2.7	2.2	0.4	0.9
Santa Lucía	19.5	15.1	4.6	1.5	1.2	1.3	2.3	7.0	<1.0	4.4
San Vicente y las Granadinas	17.2	12.7	7.2	5.5	2.7	2.1	1.1	2.9	<1.0	2.3
Trinidad y Tabago	17.4	14.4	11.4	16.7	13.3	7.6	7.7	10.8	7.8	11.4

Fuente: Informes del Banco Central, varios años y territorios.

Banco Central del Caribe Oriental (ECCB), Informes Anuales, varios años.

CEPAL, 1990.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Progreso económico y social en América Latina - Informe 1990, Washington, D.C., 1990.

Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales, varios años.

Banco Mundial, Memorandos Económicos, varios años y territorios.

Nota: * Provisional.

.. Datos no disponibles.

Cuadro 6

COEFICIENTES DEL SERVICIO DE LA DEUDA, 1970, 1980-1986

Territorio	1970/1975 ^a	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Antigua	1.2
Bahamas	1.0	2.6	4.8	3.9	3.3	4.2	3.4	8.8
Barbados	0.9	1.9	2.4	2.8	2.8	2.9	3.8	6.7
Belice	2.6	1.4	2.3	4.4	5.3	5.2	16.0	11.4
Dominica	4.5	4.1	4.8	4.0	7.0	10.1	9.4	9.1
Granada	2.7	4.1	3.7	6.9	6.2	17.6	20.5	15.8
Guyana	3.3	22.3	26.2	32.9	52.6	62.4	76.0 ^c	81.4 ^c
Jamaica	2.6	24.0	38.5	39.8	49.0	52.7	61.3	58.9
Montserrat	..	4.1	2.4	3.5	2.6	8.3	9.8	..
Saint Kitts y Nevis	6.2	1.1	1.0	1.5	2.0	2.6	8.3	..
Santa Lucía	0.4	1.8	1.9	4.7	2.2	3.4	4.2	2.6
San Vicente y las Granadinas	1.9	..	3.2	2.9	2.7	3.2	3.8	3.5
Trinidad y Tabago	2.8	6.1	2.2	2.5	6.8	5.5	6.4	11.3

Fuente: Base de datos estadísticos de la CEPAL.

Nota:

^a Pagos del servicio de la deuda como porcentaje de las utilidades de las exportaciones de bienes y servicios en millones de dólares de los Estados Unidos.^b Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago = 1970.

Todos los demás territorios = 1975 (Saint Kitts y Nevis = 1976).

^c Incluye pagos en mora. Sobre los pagos efectivos el coeficiente es mucho más bajo.

.. Datos no disponibles.

Cuadro 7

INVERSION INTERNA BRUTA COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1980-1989

Territorio	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1989
Bahamas	18.3	18.8	21.5	20.3	16.3	19.2	18.4	18.8	..
Barbados	25.3	27.6	22.6	19.9	16.2	15.4	15.8	16.0	14.1
Belice	25.3	27.2	24.6	18.9	23.5	19.8	19.5	24.2	26.4
Granada	25.3	27.2	24.6	18.9	32.0	33.4	39.0	34.0	32.9
Guyana	29.8	29.5	24.2	21.0	27.4	29.8	33.8	31.9	21.1
Jamaica	15.7	20.4	20.9	22.3	23.0	25.0	18.5	22.6	27.1
San Vicente y las Granadinas	40.3	33.2	28.8	25.5	27.9	29.0	30.4	35.6	28.5
Trinidad y Tabago	30.6	27.6	28.3	26.0	21.6	20.6	22.2	19.1	18.4

Fuente: Banco Mundial, *World Tables 1989-1990*, Baltimore, Maryland, Johns Hopkins University Press, 1990.

Nota: No se dispone de datos para los demás territorios.

.. Datos no disponibles.

Cuadro 8

TASAS DE CRECIMIENTO (%) DE LOS SALARIOS REALES EN DOS TERRITORIOS DE LA
CARICOM, 1980-1989

Año	Territorio	
	Barbados	Trinidad y Tabago
1980	4.3	4.2
1981	-4.1	4.2
1982	0.0	18.4
1983	0.0	5.7
1984	5.4	-0.2
1985	3.8	-2.8
1986	3.4	-5.5
1987	1.9	-7.1
1988	-0.7	-12.6
1989	-1.2	-10.0

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Progreso económico y social en América Latina - Informe 1990, Washington, D.C., 1990.

Cuadro 9

TENDENCIAS DEL EMPLEO EN TRES TERRITORIOS DE LA CARICOM, 1977-1989

Año	Categoría	Jamaica		Trinidad y Tabago		Barbados	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
1977							
Fuerza de trabajo (miles)		480.9	409.7	298.4	127.4	57.7	45.7
Empleados (miles)		407.9	267.7	265.4	105.4	51.6	35.6
Desempleados (miles)		73.0	142.1	33.0	21.9	6.1	10.1
Tasa de empleo		84.8	65.3	88.9	82.7	89.4	77.9
Tasa de desempleo		15.2	34.7	11.1	17.2	10.6	22.1
1983/1984							
Fuerza de trabajo (miles)		544.5	463.9	320.4	159.1	61.0	51.6
Empleados (miles)		456.3	286.1	280.2	131.8	54.3	41.4
Desempleados (miles)		88.2	177.8	40.2	27.3	6.7	10.2
Tasa de empleo		83.8	61.7	87.5	82.8	89.0	80.7
Tasa de desempleo		16.2	38.3	12.5	17.2	11.0	19.8
1985/1988/1989							
Fuerza de trabajo (miles)		569.4	493.5	317.2	158.1	62.6	58.8
Empleados (miles)		507.3	364.5	268.3	130.6	54.9	45.3
Desempleados (miles)		62.1	129.0	48.9	27.5	7.7	13.5
Tasa de empleo		89.1	73.9	84.6	82.6	87.7	77.0
Tasa de desempleo		10.9	26.1	15.4	17.4	12.3	23.0

Fuente: Informes de las encuestas sobre la fuerza de trabajo.

Nota: Años seleccionados sobre la base de la disponibilidad de datos comparables.

Jamaica 1977 1983 1989
 Trinidad y Tabago 1977 1984 1985 - todos los años se refieren a diciembre
 Barbados 1977 1983 1988 (promedio de los tres primeros trimestres)

Cuadro 10

**DISTRIBUCION PROPORCIONAL DE LA POBLACION ACTIVA POR GRUPO OCUPACIONAL
Y GENERO, 1970 Y 1980**

Territorio	Agricultura		Industria		Servicios	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
CARICOM						
Bahamas 1970	7.9	5.3	28.6	6.3	56.2	72.8
1980	7.8	2.9	23.6	7.0	66.2	88.5
Barbados 1970	16.5	15.3	38.3	14.7	40.7	66.2
1980	10.2	8.5	29.6	20.3	56.2	67.5
Belize 1970	42.1	7.9	27.3	13.3	27.1	77.3
1980	44.7	8.6	16.7	14.4	34.3	72.9
Dominica 1970	46.6	27.2	22.0	12.3	30.5	59.7
1980	45.3	22.0	22.6	11.3	26.9	57.8
Granada 1970	34.2	31.9	31.6	13.9	29.5	49.7
1980	35.0	20.7	21.5	8.8	41.8	68.2
Guyana 1970	32.6	12.9	28.0	12.6	37.1	73.2
1980	29.4	11.1	26.9	15.2	36.7	67.4
Jamaica 1970	39.7	8.4	26.7	17.1	23.9	66.4
1980
Montserrat 1970	20.1	20.7	42.6	7.0	35.3	70.4
1980	13.0	6.9	35.3	14.4	50.4	77.2
Saint Kitts y Nevis 1970	36.7	30.1	30.5	7.0	30.0	59.4
1980	34.6	22.6	30.5	21.1	32.4	54.0
Santa Lucía 1970	46.1	27.8	25.8	13.4	26.2	56.9
1980	38.6	21.7	21.6	12.3	35.1	60.9
San Vicente y las Granadinas 1970	32.3	23.1	25.3	12.9	39.5	61.0
1980	36.9	25.2	24.1	11.2	37.5	62.1
Trinidad y Tabago 1970	17.8	9.0	34.9	17.7	43.4	70.3
1980	11.7	5.4	44.3	18.8	40.6	72.9
OTROS						
Islas Vírgenes Británicas 1970	10.0	1.2	49.6	6.0	39.1	91.5
1980	8.7	0.3	27.9	4.7	61.7	92.7
Islas Caimán 1970	6.0	0.6	38.6	6.1	50.7	87.1
1980
Islas Turcas y Caicos 1970	15.9	16.7	39.4	8.7	43.1	73.2
1980	18.5	11.7	16.6	6.7	49.8	69.6

Fuente: Informes de los censos de población, 1970 y 1980.

Nota: Para los totales, véase el cuadro 12.

Agricultura = agricultura, silvicultura y pesca.

Industria = minería y canteras, industria manufacturera, electricidad/gas/agua, construcción.

Servicios = comercio, transporte, finanzas/seguros/bienes raíces, gobierno, comunidad y otros.

Cuadro 11

PARTICIPACION FEMENINA (%) EN CADA GRUPO OCUPACIONAL DE LA POBLACION ACTIVA, 1970 Y 1980

Territorio	Agricultura		Industria		Servicios	
	1970	1980	1970	1980	1970	1980
CARICOM						
Antigua
Bahamas	30.7	21.9	12.8	18.4	46.5	50.4
Barbados	37.1	38.2	19.7	33.8	50.9	47.2
Belice	4.1	4.5	10.0	17.6	39.2	34.6
Dominica	25.4	19.2	24.5	19.7	53.3	51.2
Granada	36.0	26.2	21.0	19.7	50.5	49.5
Guyana	8.4	9.9	9.4	14.2	31.3	35.0
Jamaica	9.1	..	23.2	..	56.8	..
Montserrat	35.1	25.5	7.9	20.7	51.2	49.5
Saint Kitts y Nevis	33.0	30.0	12.1	31.2	54.5	52.2
Santa Lucía	24.4	24.8	21.7	25.1	53.8	50.4
San Vicente y las Granadinas	27.8	26.4	21.6	19.6	45.4	46.5
Trinidad y Tabago	14.3	15.5	14.3	14.5	35.0	41.8
OTROS						
Islas Vírgenes Británicas	4.1	2.3	4.1	9.3	45.6	47.8
Islas Caimán	5.0	..	7.8	..	47.9	..
Islas Turcas y Caicos	34.7	30.0	10.1	21.5	46.4	48.5

Nota: Para la participación femenina en el total, véase el cuadro 13.

Cuadro 12

DISTRIBUCION PROPORCIONAL DE LA POBLACION ACTIVA POR GRUPO OCUPACIONAL Y GENERO, 1970 Y 1980

Territorio	Profesional, técnica, administrativa y directiva		De oficinas, ventas y servicios		Agricultura		Producción y conexas		Total	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
CARICOM										
Bahamas 1970	15.3	12.1	24.6	59.1	7.3	4.7	45.6	8.6	41 800	28 000
1980	14.1	15.0	31.5	74.2	10.7	2.5	42.2	7.2	45 800	34 900
Barbados 1970	11.6	10.0	24.1	60.2	16.4	14.7	41.4	13.0	49 000	31 400
1980	12.2	12.2	26.3	58.2	10.7	8.3	49.4	20.1	41 400	55 700
Belice 1970	5.5	25.1	14.9	55.7	40.0	7.1	27.9	11.3	24 900	5 600
1980	6.1	23.9	14.8	52.5	41.2	5.4	37.1	15.7	30 800	7 700
Dominica 1970	5.4	11.6	10.8	44.4	48.8	29.8	27.4	9.6	12 200	7 100
1980	6.9	16.7	11.9	44.6	43.2	19.3	35.8	13.4	14 000	6 800
Granada 1970	7.0	10.7	16.7	42.1	33.8	32.4	39.1	13.2	15 700	9 500
1980	8.6	14.8	18.1	49.0	34.6	18.8	37.6	16.1	16 200	9 700
Guyana 1970	8.4	21.4	13.3	54.7	32.1	13.1	30.2	9.0	123 500	28 800
1980	8.5	23.8	19.6	50.2	24.3	8.7	46.4	15.7	149 000	43 700
Jamaica 1970	5.4	11.5	14.3	60.6	40.7	8.0	30.8	17.0	316 200	150 300
1980
Montserrat 1970	8.5	15.4	18.7	58.1	22.2	20.3	48.9	5.9	2 400	1 200
1980	11.7	16.9	21.1	62.4	17.4	7.7	49.5	12.4	2 600	1 700
Saint Kitts y Nevis 1970	7.4	13.9	16.9	49.0	36.5	29.9	33.5	6.1	7 600	4 500
1980	8.6	13.7	17.3	43.4	33.2	21.8	39.7	19.9	8 800	5 800
Santa Lucía 1970	6.1	13.1	10.9	42.5	47.5	29.5	32.6	12.8	16 700	8 900
1980	8.3	14.0	17.8	49.8	35.9	18.8	36.9	16.1	20 200	11 900

Territorio	Profesional, técnica, administrativa y directiva		De oficinas, ventas y servicios		Agricultura		Producción y conexas		Total	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
San Vicente y las Granadinas 1970 1980	7.8 8.5	13.1 17.0	14.9 17.0	42.3 47.6	30.5 31.1	20.4 17.1	35.2 42.8	13.3 17.4	13 200 16 600	7 100 8 700
Trinidad y Tabago 1970 1980	9.4 10.1	17.2 17.7	23.8 23.3	57.3 60.5	17.0 9.7	8.8 4.6	41.7 55.2	14.1 15.7	164 200 247 300	54 600 98 600
OTROS										
Islas Vírgenes Británicas 1970 1980	12.5 15.6	19.3 18.1	15.6 24.2	75.5 75.9	10.3 8.8	1.0 0.3	53.1 50.5	4.0 4.0	2 800 3 000	1 000 1 800
Islas Caimán 1970 1980	17.0 ..	13.1 ..	18.9 ..	80.0 ..	6.6 ..	0.4 ..	46.9 ..	6.1 ..	2 200 ..	1 200 ..
Islas Turcas y Caicos 1970 1980	12.3 19.4	21.6 17.2	23.3 22.8	50.7 56.9	14.8 18.6	11.3 9.4	47.6 38.2	14.2 15.9	1 000 1 500	500 1 000

Fuente: Informes de los censos de población, 1970 y 1980.

Nota: Se refiere a la población activa de 15 años y más durante los 12 meses anteriores al censo para todos los territorios con la excepción de Trinidad y Tabago 1980, en que el período de referencia es la semana anterior.
Las discrepancias en el total se deben a que se han redondeado las cifras y a la omisión de "no disponibles".

Cuadro 13

PARTICIPACION DE LAS MUJERES (%) EN CADA GRUPO OCUPACIONAL DE LA POBLACION ACTIVA, 1970 Y 1980

Territorio	Profesional y técnica		Administrativa y directiva		De oficina, ventas y servicios		Agricultura		Producción, transporte y conexas		Total de la población activa	
	1970	1980	1970	1980	1970	1980	1970	1980	1970	1980	1970	1980
CARICOM												
Antigua
Bahamas	46.7	48.8	13.7	25.1	61.7	64.2	30.1	15.9	11.2	11.5	40.1	43.2
Barbados	39.3	46.9	10.7	18.9	61.6	62.2	36.5	36.6	16.7	23.2	38.9	42.6
Belize	53.4	51.8	8.9	12.1	45.8	46.8	3.9	3.2	8.4	9.5	18.4	19.9
Dominica	60.0	57.6	15.8	23.8	70.6	64.6	26.2	17.9	17.0	15.4	36.8	32.8
Granada	50.8	53.4	16.4	19.1	60.4	61.9	36.8	24.7	17.0	20.5	37.7	37.5
Guyana	39.9	47.5	5.6	12.8	40.3	42.9	8.7	9.5	6.5	9.0	18.8	22.7
Jamaica	53.5	..	12.3	..	66.8	..	8.6	..	20.8	..	32.1	..
Montserrat	52.8	54.2	21.6	25.8	61.9	65.4	32.4	22.1	5.9	13.8	34.5	39.0
Saint Kitts y Nevis	57.6	57.8	10.6	14.0	63.5	62.2	33.1	30.1	9.8	24.7	37.5	39.6
Santa Lucía	57.3	53.5	18.7	17.2	67.6	62.1	25.0	23.5	17.4	20.3	34.9	37.0
San Vicente y las Granadinas	50.4	54.3	11.5	20.2	60.4	59.6	26.4	22.4	16.9	17.6	35.0	34.5
Trinidad y Tabago	41.7	45.6	8.4	14.2	44.4	50.9	14.7	15.7	10.1	10.2	24.9	28.5
OTROS												
Islas Vírgenes Británicas	40.4	44.9	19.8	31.7	63.5	65.6	3.4	2.2	2.6	4.6	26.4	37.8
Islas Caimán	31.4	..	22.3	..	69.6	..	3.3	..	6.6	..	34.8	..
Islas Turcas y Caicos	53.1	40.2	7.1	12.8	52.6	62.7	28.0	25.4	13.1	21.9	36.2	40.3

Nota: .. Datos no disponibles.

Cuadro 14

INDICADORES DEL EMPLEO FEMENINO POR GRUPO OCUPACIONAL, BARBADOS, 1970-1989

Grupo ocupacional	1970		1980		1985		1989		1970	1980	1985	1989
	Distribución porcentual de los trabajadores											
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Mujeres como proporción de todos los trabajadores			
Profesional	9.5	9.6	9.8	11.6	8.7	11.2	7.7	10.7	39.3	46.9	50.0	53.6
Administrativo y directivo	2.1	0.4	2.6	0.8	5.2	2.7	3.4	1.8	10.7	18.9	28.9	30.0
De oficina	6.3	14.0	8.9	21.0	11.3	25.2	7.0	23.2	58.6	63.8	63.1	73.4
Ventas	6.4	13.6	7.2	11.7	7.1	11.2	8.0	12.3	57.8	54.9	54.9	56.1
Servicios	11.4	32.6	10.6	26.2	16.0	27.2	18.4	29.6	64.8	64.8	56.8	57.1
Agricultura	16.3	14.7	10.9	8.4	7.3	6.5	6.1	6.2	36.6	36.6	40.6	45.5
Producción y conexos	45.7	14.7	50.1	20.3	4.0	10.5	4.3	9.2)	17.1	23.2	66.7	64.3
Trabajadores/artesanos calificados					10.4	3.2	11.9	1.8)			19.4	11.4
Transporte	2.2	0.3	- ^a	- ^a	30.0 ^b	2.2 ^b	33.0 ^b	5.1 ^b	7.8	- ^a	5.4	2.3
Total	(48 900)	(31 400)	(52 000)	(40 100)	(52 000)	(40 100)	(58 700)	(48 700)	39.1	42.7	43.5	45.3

Fuente:

Joycelin Massiah, *Weathering Economic Crises: Economic Recession and Barbadian Women in Manufacturing, 1970-1987*, Cave Hill, Barbados, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de las Indias Occidentales, 1991.

^a Los cuadros de los censos publicados incluyen transporte y comunicaciones en la categoría de personal de oficina.

^b Los cuadros publicados combinan transporte, obreros de la construcción y jornaleros. Las discrepancias en los totales se deben a que se han redondeado las cifras.

Cuadro 15
MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LOS ASUNTOS DE LA MUJER EN LOS PAISES DEL CARIBE MIEMBROS DEL COMMONWEALTH

Territorio	Fecha de establecimiento/Duración					Comisión/Consejo Asesor
	Despacho	Oficina	Departamento	Ministerio	Comisión Nacional	
Jamaica	1974	1975				1972-presente
Trinidad y Tabago				1975 ^a	1975	
Guyana		1980		1976 ^b		1976-presente
Barbados		1984	1976		1976-1978	1984-1986
Belice		1981			1982	
Santa Lucía				1981 ^c		
Granada	1979	1983		1979-1983	1976	
San Vicente y las Granadinas	1985					
Dominica	1980	1983	1987	1984 ^d		
Antigua	1980			1978 ^e		1983-presente
Saint Kitts y Nevis	1981		1989 ^f			
Montserrat				1984-presente		
Islas Vírgenes Británicas				1983 ^g		
Secretaría de la CARICOM	1978			?		

Fuente:

Joycelin Massiah, "Making the Invisible Visible: Indicators for Planning for Women in Caribbean Development", informe preparado para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Cave Hill, Barbados, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de las Indias Occidentales, marzo, inédito.

Nota:

Ministerio se refiere al ministerio en que se asignó a un funcionario existente la responsabilidad de los asuntos de la mujer, salvo en el caso de Granada y de Saint Kitts y Nevis, que tenían ministerios de asuntos de la mujer completos durante los períodos señalados.

^a Secretario Permanente Encargado de Asuntos de la Mujer.

^b Ministerio de Cooperativas.

^c Ministerio de Servicios de la Comunidad y Oficial Principal de Desarrollo de la Comunidad.

^d Ministerio de Turismo, Información y Cultura y Coordinador de Asuntos de la Mujer.

^e Ministerio de Estado.

^f Dirección.

^g Ministerio de la Juventud y Desarrollo de la Comunidad.

Cuadro 16

CRECIMIENTO DE LOS SECTORES AGRÍCOLA Y MANUFACTURERO EN CUATRO TERRITORIOS DE LA CARICOM, 1980-1989

Sector Territorio	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989*
Agricultura										
Barbados	5.4	-17.2	-2.5	3.9	9.4	-0.5	4.5	-11.2	-5.9	-9.0
Guyana	0.5	2.3	-1.4	-3.7	3.4	0.0	3.7	-5.8	-8.7	-5.5
Jamaica	-4.3	2.3	-7.9	7.3	10.0	-3.5	-2.2	5.3	-5.5	-4.2
Trinidad y Tabago	7.9	-1.3	3.2	-3.4	-32.7	-1.1	-23.6	6.4	-9.0	69.4
Industria manufacturera										
Barbados	2.2	-3.6	-5.4	2.5	1.9	-9.5	5.1	-6.6	6.7	5.4
Guyana	0.8	6.1	-12.9	-16.4	-5.9	-3.1	0.0	-7.5	-5.2	-13.6
Jamaica	-11.0	0.8	7.5	1.9	-4.2	0.4	2.4	6.3	2.0	7.1
Trinidad y Tabago	2.5	-6.5	2.3	-1.2	-2.4	-10.4	7.1	-8.8	-8.0	-2.9

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Progreso Económico y Social en América Latina - Informe 1990, Washington, D.C., 1990.

Nota: Producción real a costo de factores.

* provisional.

Cuadro 17

**CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION OCUPACIONAL DE LA POBLACION EMPLEADA EN TRES TERRITORIOS
DE LA CARICOM, 1977-1989**

Período	Jamaica			Trinidad y Tabago ^a			Barbados ^b		
	Agricultura	Industria	Servicios	Agricultura	Industria	Servicios	Agricultura	Industria	Servicios
1977-1983/1984									
Hombres	-1.0	1.0	1.4	-0.8	-2.0	2.7	-0.2	6.2	-3.9
Mujeres	-2.3	0.1	0.5	-1.2	-3.0	4.6	-1.9	-1.3	3.5
1983-1988/1989									
Hombres	-4.4	2.2	-1.6	-3.2	2.5	0.7
Mujeres	-0.5	2.0	1.9	0.3	-5.2	4.8

Nota:

Agricultura = agricultura, silvicultura y pesca.

Industria = minería y canteras, industria manufacturera, electricidad/gas/agua, construcción.

Servicios = comercio, transporte, finanzas/seguros/bienes raíces, gobierno, comunidad y otros.

^a 1977-1985.^b 1981-1985 y 1985-1989 (último trimestre solamente).

Cuadro 18

INDICADORES DEL EMPLEO POR CUENTA PROPIA EN TRES TERRITORIOS DE LA CARICOM, 1980-1989

Año	Jamaica			Trinidad y Tabago		Barbados		
	Hombres	Mujeres	Participación femenina (%) en el empleo por cuenta propia	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Participación femenina (%) en el empleo por cuenta propia
1980	47.5	32.2	30.4
1981	13.2	8.2	31.5
1982	12.5	7.6	31.7
1983	43.4	35.0	33.1	12.0	8.2	37.4
1984	12.2	7.0	30.1
1985	47.4	36.4	33.4	23	16	12.7	7.5	31.2
1986	47.0	35.4	35.1	11.9	7.3	32.6
1987	23.2	15.3
1988	44.7	33.7	36.0
1989	42.2	33.0	36.0

Fuente: Patricia Anderson y M. Witter, "The Distribution of the Social Cost of Jamaica's Structural Adjustment 1977-1989", documento preparado para el proyecto de investigación sobre el efecto del ajuste estructural en la deuda social de Jamaica, patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto de Planificación de Jamaica, mayo, 1991.

Trinidad y Tabago: varias fuentes.

Barbados: informes de las encuestas sobre la fuerza de trabajo.

Esquema 1

**PUNTOS DE VISTA DE LOS PROPONENTES DE LA MUJER EN EL DESARROLLO:
CUESTIONES Y RESPUESTAS**

Cuestiones	Proponentes		
	Impulsores	Ejecutores	Estudiosos
Desarrollo económico	Efecto negativo Integrar a la mujer	Eficiencia	Recuento de las actividades económicas de las mujeres Clase/género
Igualdad	Derechos jurídicos	Ingreso como elemento liberador	Patriarcado principal limitación
Adquisición de poder	Formar organizaciones de mujeres	Proyectos sólo para mujeres	Feminismo global Valores distintos
Educación	Acceso a escuelas profesionales	Educación no académica	Científica y técnica Revisar contenido para eliminar sesgo por sexo
Empleo	Acción afirmativa Base para la condición jurídica y social	Microempresa	División sexual del trabajo
Bienestar	Se considera que crea dependencia	Participación en programas de salud, población y vivienda	Papeles dobles Esfera femenina
Eficiencia	Integración	Programas sectoriales	No feministas

Fuente: Irene Tinker (comp.), Persistent Inequalities: Women and World Development, Oxford, Oxford University Press, 1990.

DIFERENTES ENFOQUES DE POLITICAS CON RESPECTO A LAS MUJERES DEL TERCER MUNDO

"La mujer en el desarrollo" (WID)

Cuestiones	Bienestar	Equidad	Antipobreza	Eficiencia	Adquisición de poder
Orígenes	Enfoque más antiguo: - modelo residual de bienestar social bajo la administración colonial - modelo de desarrollo económico de crecimiento acelerado/modernización	Enfoque WID original: - fracaso de la política de desarrollo de la modernización - influencia de Boserup y feministas del Primer Mundo sobre la Enmienda Percy - declaración del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer	Segundo enfoque WID: - equidad moderada debido a las críticas - vinculado a la redistribución con crecimiento y las necesidades básicas	Tercer enfoque WID y actualmente predominante: - deterioro de la economía mundial - las políticas de estabilización y ajuste económicos confían en la contribución económica de la mujer al desarrollo	Enfoque más reciente: - surgió del fracaso del enfoque de equidad - literatura feminista y organizaciones de base de las mujeres del Tercer Mundo
Período más popular	1950-1970: pero su uso es todavía generalizado	1975-1985: intentos de adoptarlo durante el Decenio de la Mujer y desde entonces	Años setenta en adelante: popularidad limitada todavía	Posterior a los años ochenta: actualmente el enfoque más popular	1975 en adelante: acelerado durante los años ochenta, popularidad todavía limitada
Propósito	Introducir a las mujeres en el desarrollo como mejores madres: se considera que éste es su papel más importante en el desarrollo	Lograr equidad para la mujer en el proceso de desarrollo: se considera que las mujeres son participantes activas en el desarrollo	Asegurar que las mujeres pobres aumenten su productividad: la pobreza de la mujer se considera como problema de subdesarrollo y no de subordinación	Asegurar que el desarrollo sea más eficiente y más eficaz: la participación económica de la mujer se considera relacionada con la equidad	Dotar de poder a la mujer mediante una mayor confianza en sus propios medios: la subordinación de las mujeres se considera no sólo como un problema de los hombres sino también de la opresión colonial y neocolonial
Satisfacción de las necesidades de la mujer y reconocimiento de su papel	Satisfacer las NPG* en el papel reproductivo, particularmente en lo que se refiere a ayuda alimentaria, malnutrición y planificación de la familia	Satisfacer las NEG+ en cuanto a su triple papel —directamente mediante la intervención estatal de arriba hacia abajo, dando autonomía política y económica y reduciendo la desigualdad con respecto al hombre	Satisfacer las NPG* en el papel productivo, ganar un ingreso, especialmente en proyectos generadores de ingreso en pequeña escala	Satisfacer las NPG* en el contexto de la disminución de los servicios sociales sobre la base de los tres papeles de la mujer y la elasticidad de su tiempo	Alcanzar las NEG+ en cuanto al triple papel —indirectamente mediante la movilización de abajo hacia arriba alrededor de las NPG* como manera de hacer frente a la opresión

Esquema 2 (concl.)

Cuestiones	Bienestar	Equidad	Antipobreza	Eficiencia	Adquisición de poder
Comentarios	Se considera a las mujeres como beneficiarias pasivas del desarrollo y se centra la atención en el papel reproductivo. No confrontacional, por consiguiente todavía muy popular, especialmente entre los gobiernos y las ONGs tradicionales	Al identificar la posición subordinada de la mujer en cuanto a su relación con el hombre, confrontacional, criticada como feminismo occidental, considerada amenazadora e impopular entre los gobiernos	Las mujeres pobres son aisladas como categoría separada con tendencia a reconocer sólo su papel productivo; renuencia de los gobiernos a prestar ayuda limitada a la mujer significa popularidad todavía a nivel de las ONGs en pequeña escala	Se considera a la mujer enteramente desde el punto de vista de su capacidad de entrega y de extender el día de trabajo. El enfoque más popular tanto entre los gobiernos como entre los organismos multilaterales	Potencialmente confrontacional con énfasis en el Tercer Mundo y la autosuficiencia de la mujer. En gran medida no apoyada por los gobiernos y los organismos. Evita las críticas del feminismo occidental y significa un lento crecimiento de las organizaciones voluntarias subfinanciadas

Fuente: Caroline Moser, "Gender planning in the Third World: meeting practical and strategic gender needs", World Development, vol. 17, N° 11, Oxford, Pergamon Press, 1989.

- * NPG - Necesidades prácticas de género.
- + NEG - Necesidades estratégicas de género.